

ABRIL- JUNIO DE 2022 VOL. 14

BOLETÍN CELYC



CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE

PROCESOS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA



**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

PROCESOS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA

COORDINADOR

Andrés Felipe Ríos Ríos

COMITÉ EDITORIAL

Jaime Rafael Nieto López

Luis Javier Robledo Ruiz

CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN

Luis Javier Robledo Ruiz

Liz Evelyn Echavarría Hoyos

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Verónica Osorno Salas

Andrés Felipe Ríos Ríos



Abril - Junio de 2021 Medellín, Colombia

Boletín N°14

Portada: elecciones en América Latina

Fotografía tomada de <https://www.idea.int/publications/catalogue/elecciones-en-america-latina>

Contraportada:

Repositorio web: <https://issuu.com/celycudea>

Email: celyc@udea.edu.co

CONTENIDO



EDITORIAL

3

Una conversación sobre la izquierda latinoamericana

ENTREVISTA A JAIME RAFAEL NIETO

5

Contienda electoral en Colombia 2022: entre la continuidad de la estrategia paramilitar y las ilusiones reformistas (Primera parte)

WILMAR LINCE BOHÓRQUEZ

17

Perú, un canto de sirena y un balsamo corrosivo para la esperanza: apuntes sobre la situación política nacional

JULIÁN ANDRÉS GRANDA

29

El giro a la izquierda en dos países de la Alianza Pacífico: México y Chile

MARCO ANTONIO VÉLEZ

34

Sin mujeres no hay democracia

LINA MARCELA MARÍN GÓMEZ

40

Contienda electoral en Colombia 2022: entre la continuidad de la estrategia paramilitar y las ilusiones reformistas (Segunda parte)

WILMAR LINCE BOHÓRQUEZ

47

¿Solidaridad frente a Ucrania?

JORGE EDUARDO SUÁREZ GÓMEZ.

58

EDITORIAL

La crisis social y política latinoamericana agudizada por la pandemia del covid-19 y sus efectos económicos, ha generado modificaciones importantes en el panorama político y en la correlación de las diferentes fuerzas que se disputan el poder desde múltiples escenarios institucionales y no institucionales. Esta modificación se manifiesta en la profundización del descontento ciudadano hacia los gobiernos, las instituciones, y los partidos que, en múltiples casos, han sido incapaces de responder a las demandas y necesidades de una ciudadanía que, a pesar de estar confinada por efecto de la pandemia del Coronavirus, se ha venido movilizandocrecientemente y ha planteado la necesidad de transformaciones profundas y reales del régimen político, y el modelo de desarrollo y de vida al que aspiran.

Uno de los terrenos centrales donde se escenifica esta lucha por el poder político, es el de los procesos electorales recientes y venideros. Estos reflejan la tensión política acumulada y ofrecen un campo de observación oportuno para analizar la profundidad, alcance y límites de los cambios producidos en la región. Dicho ejercicio pasa por situar la manera como diferentes fuerzas políticas han interpretado y recogido este conjunto de expectativas de cambio social y la manera como han sido traducidas por los partidos, dirigentes y organizaciones en apuestas viables y eficaces, por su capacidad de convocatoria, sus agendas, los imaginarios sociales que encarnan, y los límites de sus proyectos políticos. Así mismo, pasa por la evaluación de los eventuales escenarios de gobierno, por la confrontación con los sectores económicos y políticos tradicionales aferrados a los beneficios de un modelo de acumulación capitalista que les reporta ingentes beneficios y un tipo de Estado rentista y al servicio de grandes mafias de la corrupción y exacción de lo público.

Invitamos a leer en este número diferentes reflexiones que sitúan estos y otros tópicos centrales de los procesos electorales y de gobierno en América Latina: el lugar de las izquierdas y el progresismo latinoamericano, la contienda electoral colombiana, la situación política peruana tras la llegada de Pedro Castillo al gobierno, el papel que vienen jugando los gobiernos de Boric y López Obrador en la Alianza Pacífico, la centralidad de la mujeres en la democracia latinoamericana, y las posturas frente a la guerra Rusia-Ucrania.

Esperamos que este número aporte al debate y la reflexión crítica y motive a las y los lectores a contribuir a este espacio de discusión, enviando sus comentarios al correo del CELyC celyc@udea.edu.co o visítanos en nuestras redes sociales.



EL PROGRESISMO Y LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

ENTREVISTA A JAIME RAFAEL NIETO*

ANDRES FELIPE RÍOS**

El cambio político que se ha operado en los últimos años en América Latina, acompañado de la crisis multidimensional que ha provocado la pandemia del coronavirus, ha puesto de manifiesto un descontento social acumulado por décadas, que en algunos casos ha producido estallidos sociales, crisis de los gobiernos, emergencia de nuevas subjetividades políticas y un cuestionamiento de los modelos políticos y económicos en la región.

En esta entrevista conversamos con el director del Centro de Estudios Latinoamericanos, doctor en pensamiento político y profesor del departamento de sociología de la Universidad de Antioquia, Jaime Rafael Nieto López sobre el papel que han jugado las izquierdas políticas en América Latina, sus apuestas, desafíos y vigencia en el escenario actual.

*Sociólogo, doctor en Pensamiento político, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CELyC), y miembro de la línea de investigación Resistencia Ciudadanía y Conflicto. Docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Correo: jaime.nieto@udea.edu.co

**Sociólogo, estudiante de Maestría en Ciencia Política, miembro de la línea de investigación Resistencia, ciudadanía y conflicto del CELyC y docente del departamento de sociología de la Universidad de Antioquia. Correo: andres.riosr@udea.edu.co

Andrés Ríos: me gustaría comenzar conversando sobre la perspectiva que usted tiene respecto a la izquierda en América Latina, ¿cuál es el papel que representa hoy ese proyecto político en América Latina, cuáles son sus principales banderas y apuestas hoy?

Jaime Nieto: considero que conviene en primer lugar puntualizar la pregunta por la izquierda en América Latina incluso yo diría que, a nivel mundial, porque en realidad en vez de una izquierda en singular, en América Latina hemos contado en realidad con un espectro muy amplio y muy plural de las izquierdas. Recuerda que, por ejemplo, desde el triunfo de la Revolución Cubana la izquierda latinoamericana fue fundamentalmente izquierda armada y de alguna manera por la novedad del triunfo de la Revolución Cubana y la imitación de su modelo, esa era la izquierda de moda, o sea, esa que concebía el cambio y el triunfo por la vía de la guerra de guerrillas o por la vía revolucionaria.

No obstante, la pluralidad de la izquierda nunca dejó de estar presente, incluso agotado ese modelo en los años 80 con el advenimiento de la democratización en América Latina, la caída del muro de Berlín, etc., el espectro plural de la izquierda siguió existiendo, de hecho algunos proyectos armados siguieron perviviendo como en el caso de México o en el caso de Colombia, etc.; al lado de una recomposición muy importante de la izquierda, esa que va a aparecer definitivamente en los años 90 muy articulada a los procesos de democratización política, de participación de la ciudadanía, de los nuevos procesos constituyentes, de vinculación a los nuevos procesos de carácter territorial como los indígenas, los negros, la población afro, los jóvenes incluso aquellos asociados a la irrupción de esas nuevas subjetividades políticas de esos nuevos actores, entonces podríamos decir que a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI el espectro de las izquierdas de América Latina se hace mucho más plural y creo que definitivamente abandona el modelo de la guerra de guerrillas para, digámoslo así, despegar una izquierda a las formas legales e institucionales o autónomas de participación política.

Entonces yo creo que la pregunta por la izquierda así en singular que ha hecho la experiencia de los gobiernos se refiere a una izquierda en particular, esa izquierda vinculada a lo que en América Latina conocemos como la del progresismo, esa izquierda que viene un poco de los proyectos viejos o de la vieja izquierda vinculada a los partidos comunistas, a los proyectos armados incluso, a los proyectos nacionalistas, incluso digámoslo así a desprendimientos de partidos políticos reformistas de las burguesías latinoamericanas. Esa izquierda progresista tiene una vocación muy definida, porque irrumpe en un contexto muy particular de América Latina, que es el contexto de la crisis del modelo neoliberal por un lado, y por otro lado el de la crisis de la democratización, el proceso de transición democrática se detuvo en un punto y no fue más allá de una democracia puramente electoral.

Esa izquierda progresista irrumpe en este contexto, en una coyuntura muy específica y logra capitalizar todo el descontento social y político acumulado tanto por el modelo neoliberal como por el desgaste de la transición democrática, eso es lo que explica ese ciclo digámoslo así de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas en buena parte de los países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, en parte Chile, Brasil y ahora un poco más recientemente México, Honduras y probablemente Colombia si hay un eventual triunfo de Gustavo Petro.



Ese es el marco en el cual triunfa esta izquierda progresista, es una izquierda que a pesar de las grandes expectativas que generó, no logra romper con el modelo neoliberal de desarrollo, a pesar de que se introdujeron cambios importantes sobre todo en lo que tiene que ver con la política pública social, porque tuvo desarrollos muy importantes, avances muy importantes en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, la exclusión, el campo de la educación, etc., pero en el marco mismo del modelo neoliberal y en el marco mismo de la división internacional del trabajo que hace que el modelo siga, continúe digámoslo así, a pesar de los gobiernos progresistas.

Estos gobiernos tampoco introducen reformas importantes con el modelo de la democracia liberal representativa que se instauró desde mediados de los años 80 como el modelo de democracia per se en América Latina, a pesar de las reformas constitucionales o a pesar de las nuevas asambleas constituyentes, que no podemos decir que han sido hechos efímeros o puramente sin importancia, no, han sido muy importantes, y en muchas de ellas que se han producido nuevos ordenes constitucionales, la consagración de nuevos derechos, hasta derechos de la naturaleza como en el caso de Ecuador y en parte de Chile, son constituciones que han democratizado el Estado, en parte la sociedad, etc., a pesar de eso, el modelo de Estado no ha sido reconfigurado, el modelo de Estado sigue siendo un modelo de estado liberal representativo democrático, pero hay que destacar a pesar de las limitaciones del progresismo, que ha sido una izquierda muy audaz porque en medio de esta crisis de representación, en medio de la gran fragmentación de la izquierda, en medio del descreimiento frente al comunismo, al socialismo, a la izquierda, a la autoemancipación, etc., ellos logran introducir una suerte de grieta en el modelo a largo plazo, esa grieta a pesar de que no se ha ensanchado lo suficiente, es una grieta que podría anunciar las posibilidades de una ruptura.

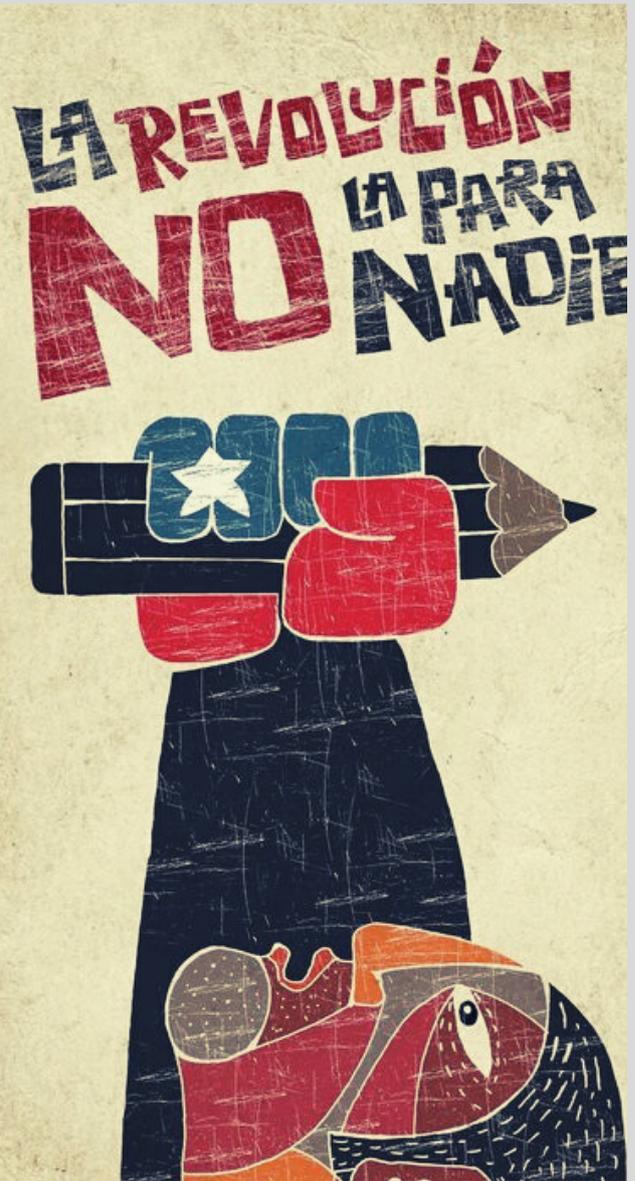


Andrés Ríos: A partir de lo que ha sido la experiencia de los gobiernos progresistas de inicios del siglo XXI quisiera, profesor Nieto, que nos ampliara cuáles son esas apuestas para un gobierno de cambio o un gobierno alternativo desde el progresismo ¿en qué medidas pueden ser alternativos esos gobiernos? ¿cuáles son los temas, cuales son los aspectos que pretenden o buscan transformar? y adicionalmente, ¿Cuáles son los retos que tienen frente a la experiencia ya vivida de los primeros gobiernos progresistas?

Jaime Nieto: Si, yo creo que hay dos cosas bien importantes profesor Andrés, una es que la izquierda sea progresista o de cualquier espectro ideológico no puede renunciar a eso que Ernesto Laclau llama “significante vacío del cambio” o sea la izquierda no puede dejarse expropiar digámoslo así ese significado del cambio, la consigna del cambio, además porque ha sido una de las marcas fundamentales de la izquierda en toda la historia de América Latina, incluso de Europa desde el siglo XIX y siglo XX, que ella representa y encarna el cambio, eso es importante porque tu sabes que también en América Latina y en Europa han surgido fuerzas políticas de derecha incluso neofascistas que también esgrimen la tesis del cambio, entonces, creo que la disputa por la idea del cambio es uno de los grandes retos que tiene esta nueva izquierda, o sea, que esta nueva izquierda no se deje digámoslo así encuadrar en la idea de que ella representa el atraso, el inmovilismo, etc. Ese es el primer reto que es mas de orden discursivo.

En términos de la acción política practica en el corto y mediano plazo yo creo que el principal reto que tiene la izquierda en América Latina en el poder o por fuera del poder es avanzar realmente en la transformación del modelo neoliberal de desarrollo y ofertar digámoslo así una alternativa creíble y posible, pero cuando digo posible, que ese posible no signifique una adecuación a la hegemonía del modelo neoliberal de desarrollo, porque la experiencia hasta ahora de estos gobiernos es que no han roto con la lógica hegemónica dominante del modelo neoliberal de desarrollo, entonces yo creo que

después de una experiencia de diez a casi quince años de gobiernos progresistas, lo que sigue es avanzar hacia una profundización de las reformas, ya no tanto en la redistribución sino también en la distribución misma de la riqueza, en implantar de manera estructural nuevos dispositivos en lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico y social, que anuncien la configuración de una nueva sociedad, de una sociedad ahí si no solo posneoliberal sino también de una sociedad poscapitalista, yo creo que ese es el segundo reto mas importante que tiene la izquierda, y un tercero y último, aparte de muchos que tiene, transformar el modelo de gestión



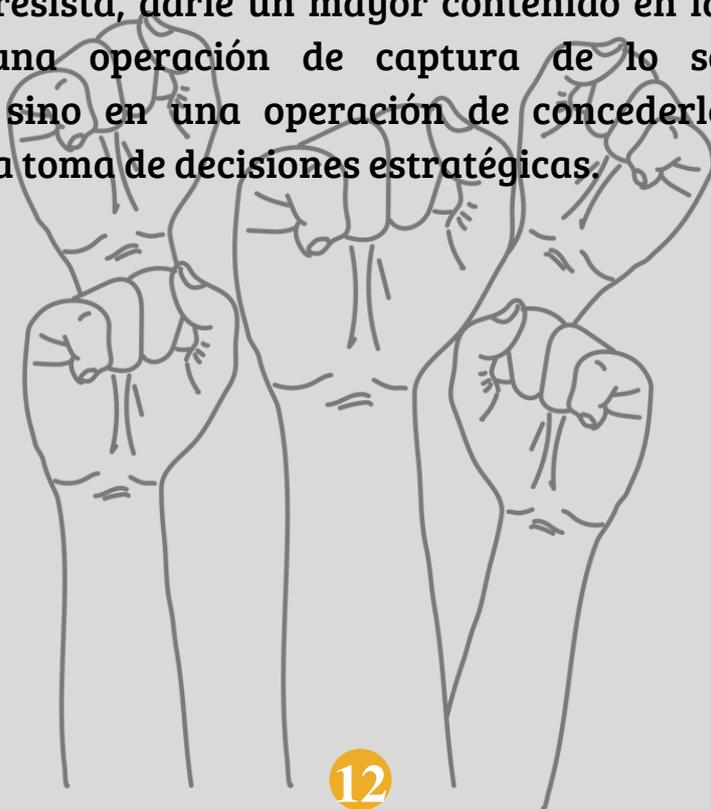
política de los estados después de los triunfos electorales, un modelo que rompa con la tendencia al burocratismo y al parasitismo creciente, eso implica un modelo que salvaguardando la autonomía de la sociedad civil popular, de las organizaciones sociales, de la resistencia popular, estimule y de garantías para el ejercicio y la organización de esta sociedad civil popular que a la postre es el respaldo en una guerra de posiciones para utilizar la expresión de Antonio Gramsci, en una guerra de posiciones contra las clases dominantes en América Latina es la garantía en ultima instancia no solo de un triunfo sino de una continuidad en el mediano o largo plazo de las transformaciones en curso.

Andrés Ríos: Hay un punto muy interesante que usted plantea profesor Nieto, y es el tema de las subjetividades políticas, de cómo están anudándose unos sujetos políticos, quizá unos nuevos sujetos políticos, con demandas frente a los gobiernos. Pensando en estas organizaciones sociales y movimientos que usted menciona, hay una tesis del profesor Massimo Modonesi que plantea “las revoluciones pasivas” como diagnóstico del fracaso de esa primera ola de gobiernos progresistas, es decir, la incapacidad de movilizar a la sociedad civil de forma sostenida y su caída en la burocratización y en la pasividad política de sectores que abanderaron en cierta medida estos cambios de gobierno, entonces, quisiera que nos contara cuál es su perspectiva del papel que deberían jugar dichos movimientos para, como lo mencionaba usted, ensanchar esa grieta, hacer que esa grieta se profundice.

Jaime Nieto: Yo creo que en la experiencia por ejemplo de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador e incluso de Bolivia, lo que muestra esta referencia del profesor Modonesi, que me parece muy acertada en la caracterización de estos gobiernos de izquierda, es que son gobiernos que se han limitado a hacer reformas desde arriba, no ha habido una interacción muy activa, valga la redundancia, o un juego de relaciones en términos de la construcción de nuevas formas de poder que vayan más allá del Estado, o sea la transición que ellos llaman posneoliberal de esta nueva izquierda progresista, es una transición marcada muy desde arriba en términos de concentrarlas en la toma de decisiones y en la conducción del proceso desde el Estado, ha sido muy estadocéntrica, y no es que el Estado no deba jugar un papel activo importante sino que genera una suerte de nuevos clientelismos y nuevos paternalismos en la relación con la sociedad civil que lleva a la postre como en efecto ha ocurrido en estos países mencionados a una inacción de la sociedad civil, a una postración de la sociedad civil.

No es casual, por ejemplo, que todas estas grandes organizaciones sociales, movimientos sociales de resistencia que irrumpieron y precedieron el triunfo de la izquierda en Bolivia, Ecuador, Venezuela, incluso en Nicaragua hayan prácticamente desaparecido de la escena, es producto precisamente de este modelo perverso de revolución pasiva tal como la concibió Antonio Gramsci. Entonces yo creo que ese es el punto que hay que romper, necesitamos es concebir un nuevo proceso de transformación revolucionaria política no estadocéntrica, o sea, no confiando en que el centro de todo esto está en el Estado, y que todo depende de los dispositivos que se desplieguen del Estado.

Yo lo que creo es que hay que aprovechar este nuevo marco no solo para -por decir un término convencional- "empoderar" a los movimientos, al pueblo, a los sujetos populares, sino también para crear, construir -esto es algo inédito porque ninguna sociedad ha hecho la experiencia de una manera definitiva- nuevas formas de poder popular que se articulen de alguna manera con las formas convencionales del modelo de Estado representativo democrático, etc., donde estas nuevas formas de organización y de poder popular se vayan convirtiendo progresivamente en el centro gravitacional, en la toma de decisiones políticas sociales y económicas de los procesos. Yo creo que eso es lo que le ha faltado desde el punto de vista político a la izquierda progresista, darle un mayor contenido en la gestión social, pero no en una operación de captura de lo social que está movilizándose sino en una operación de concederle más poder y autonomía en la toma de decisiones estratégicas.

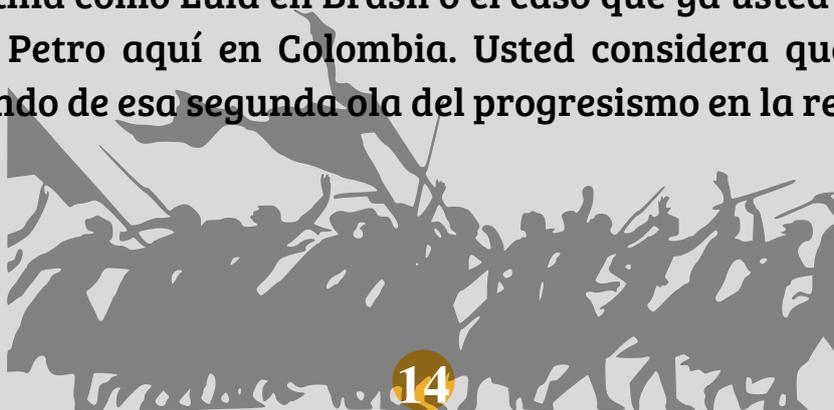


Andrés Ríos: profesor Nieto, continuando con el tema de estas nuevas subjetividades políticas en el marco de los proyectos de la izquierda progresista en América Latina, ha sido destacado el papel que han jugado las juventudes, las mujeres, los movimientos ambientales, etc. en los recientes estallidos sociales en la región ¿qué papel juegan y cuál es la novedad de este sujeto versus el sujeto revolucionario que tradicionalmente ha construido la izquierda?

Jaime Nieto: yo creo que lo novedoso no solo para América Latina sino para la izquierda a nivel mundial es que la coyuntura de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI lo que hizo fue mostrar la irrupción en la superficie de lo social y lo político esas múltiples subjetividades que han estado configurando las realidades latinoamericanas desde los últimos 50 años por lo menos, y para los cuales ni los partidos tradicionales, tanto de la derecha como de la izquierda, estaban preparados para darle la suficiente representación a esa multiplicidad de subjetividades sociales, políticas, culturales, morales, etc., presentes en la sociedad; pero, nos encontramos que esas subjetividades tratan de expresarse digámoslo así de manera auto representadas, autárquicamente, sin entablar todavía formas políticas de articulación en un proyecto hegemónico. Yo creo que eso le tiene que decir a la izquierda que tiene que reinventarse, reconfigurarse, en parte es lo que ha hecho el progresismo, por ejemplo, si uno ve la experiencia aunque algo discutible de Gustavo Petro en Colombia ha sido eso, que le está diciendo a la izquierda vanguardista tradicional de América Latina hay que reinventarse, reinventarse en qué sentido, en un sentido de proponer, de construir un discurso articulador de lo nacional popular, de lo social popular, que hoy constituye de manera diferenciada al sujeto de la transformación revolucionaria de América Latina, porque hoy por hoy no podemos seguir pensando con el marco de análisis político de la Europa del siglo XIX que hablaba de un solo sujeto tal como lo planteó Marx, que era consecuente para su época, el sujeto proletariado.

Ese sujeto proletariado hoy tiene una traducción histórico política concreta en América Latina que es el sujeto plural de lo popular, entendiendo ese sujeto plural de lo popular a todos aquellos actores o subjetividades que han irrumpido justamente porque la pervivencia del régimen capitalista de producción ha exacerbado sus formas de opresión, sus formas de explotación, sus formas de exclusión; por eso ha irrumpido lo indígena, lo negro, lo de género con las mujeres, los jóvenes, sin dejar de persistir las contradicciones clásicas relacionadas con el capital y el trabajo, relacionadas con el problema de la tierra y los campesinos, etc. Entonces se necesita mucha inventiva y mucha capacidad política para producir esta articulación hegemónica de este sujeto popular plural, plural no quiere decir que todo vale, porque también ese es el riesgo que le vemos a la propuesta de Gustavo Petro hoy en Colombia, que para decirlo en términos de Ernesto Laclau, la cadena de equivalencia se ha ampliado tanto, se han incluido tantos actores, que tiende a diluirse el referente de antagonismo frente al poder tradicional, entonces es un riesgo bastante alto, bueno, que habría que esperar un poco a las elecciones del 29 de mayo, pero creo que ese es un reto en términos de lo que has planteado desde el comienzo, Andrés, la capacidad de la izquierda de refundarse, de reinventarse para articular y dotar de representación política a esta multiplicidad de nuevas subjetividades.

Andrés Ríos: Nos gustaría concluir preguntándole por su perspectiva respecto a lo que algunos analistas señalan como una segunda ola o un segundo momento de la izquierda progresista en la región que estaríamos viviendo con la llegada al gobierno de Boric en Chile, la propuesta de cambio con la que llegó López Obrador en México, y otras opciones de gobierno en candidatos de la izquierda progresista en América Latina como Lula en Brasil o el caso que ya usted mencionaba de Gustavo Petro aquí en Colombia. Usted considera que podríamos estar hablando de esa segunda ola del progresismo en la región



Jaime Nieto: Hay analistas que piensan que, con el triunfo reciente en Honduras, de Manuel López Obrador en México, la continuidad de Ortega en Nicaragua, de Maduro en Venezuela, etc., estaríamos ante la instauración de un nuevo ciclo progresista. Aquí hay que destacar también la continuación del Movimiento al Socialismo en Bolivia, y también el caso de Perú, ha llevado a hablar de un nuevo ciclo progresista en América Latina, podría verse así.

Para otros analistas no se trataría de un nuevo ciclo sino de la continuidad del ciclo que se abrió con el triunfo de Chávez en 1998, sería un mismo ciclo brevemente interrumpido por gobiernos conservadores como el caso de Argentina, Brasil Honduras, casos muy puntuales que significarían simplemente una interrupción de este ciclo largo progresista, son maneras de mirar el proceso. Yo pienso que más allá de si hay un nuevo ciclo o una continuidad del ciclo progresista es de pronto discernir un poco en la coyuntura para donde va América Latina, sobre todo con la expectativa de que se consoliden estos gobiernos progresistas que, o bien perviven desde el primer ciclo, o bien retoman el poder en este llamado segundo ciclo, y creo que eso tiene que ver un poco con lo que planteábamos en términos de retos, porque hoy por hoy, creo que en América Latina después de la crisis de 2008 hacia acá, después de la crisis de los commodities, después de la crisis de la pandemia, yo creo que en América latina la expectativa más importante que tienen los ciudadanos tanto los de abajo propiamente dicho como los de clase media es un cambio, independientemente de quien esté en el poder, un cambio en el modelo de conducción social, de conducción económica, o sea América Latina ya no aguanta más la pervivencia de un modelo que simplemente frente a la pobreza, la exclusión, etc., provee para decirlo así pañitos de agua tibia; aquí un neoliberalismo con rostro social definitivamente no funciona. .

América Latina está reclamando gobiernos comprometidos con cambios en profundidad, con cambios que marquen nuevas fases, nuevos estadios en la constitución de las sociedades latinoamericanas, por eso es el llamado o la expectativa que uno ve es que los propios gobiernos progresistas, por un lado los que ya están en el poder profundicen el proceso de reformas y los que no estén en el poder terminen triunfando en la coyuntura actual, el caso de Petro en Colombia, el caso de Lula en Brasil, etc., terminen triunfando y puedan realmente abrir un camino de transformación sociales y económicas sobre todo en beneficio de la gran mayoría de la población, porque de lo contrario ya no estaríamos en presencia solo de la década perdida que se vivió en los años 80 sino prácticamente de medio siglo perdido.





Foto tomada de Twitter: @andersoncasta16, 02 Ene 2022

CONTIENDA ELECTORAL EN COLOMBIA 2022: ENTRE LA CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA PARAMILITAR Y LAS ILUSIONES REFORMISTAS* (PRIMERA PARTE)**

Wilmar Lince Bohórquez ***

INTRODUCCIÓN

Luego de 20 años de control del Estado por parte de Álvaro Uribe y sus descendencias partisanas y/o de haber decidido quién era el presidente de Colombia, las elecciones presidenciales 2022 muestran un movimiento político que desafía seriamente la hegemonía del llamado uribato. La unidad táctica de formaciones proselitistas y movimientos sociales que lleva por nombre Pacto Histórico, se ha constituido en una fuerza política que recoge sentimientos y luchas de sectores populares históricamente borrados de las estructuras del Estado. Un grueso del pueblo colombiano, buena parte de la intelectualidad académica,

*Este ensayo es el cruce entre dos investigaciones que se han venido adelantando en las líneas de trabajo que coordino. De un lado el proyecto de investigación Afectaciones a la estructura agraria en regiones de Antioquia: actores y factores. Aportes para la elaboración de un mapa digital de problemas rurales, CODI 2016-12976 y, de otro, Dialéctica del Estallido Social 2021: Ecosistema de la contienda política-económica inherente Al capitalismo-imperialismo. El nodo entre ambas investigaciones, con base en algunos de los hallazgos, es lo que se ha venido reconstruyendo como Estrategia Paramilitar.

** Por motivos editoriales, este texto se dividirá en dos partes, ambas en la presente número. La primera parte recogerá la introducción, el subtítulo 1 y el subtítulo 2; la segunda parte abarcará el subtítulo 3 y las consideraciones finales.

*** Sociólogo, profesor del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia. Coordinador del Grupo de Estudio y Semillero Método Marxista y Teoría Crítica Radical. Coordinador Línea de Investigación Problemas Rurales y Ruralidades, adscrita al Grupo Redes y Actores Sociales. Correo: wilmar.lince@udea.edu.co

organizaciones estudiantiles, sectores feministas, afrodescendientes, indígenas, organizaciones campesinas, pequeños y medianos comerciantes, entre algunos otros estamentos de las masas populares, han encontrado cercanías ideológicas en las propuestas del Pacto Histórico (Jiménez, 2022).

La reflexión sociológica acerca del acontecimiento electoral 2022 pasa, para quien elabora este análisis, por describir –con los límites de espacio de esta publicación– tres ejes, predominantemente nacionales, que en sus trayectorias se entrecruzan. Dichos ejes, más esta introducción y unas consideraciones finales, suman las cinco componentes del escrito: 1- esta introducción donde se plantea el esquema general de la reflexión 2- el denominado uribismo en el poder desde 2002 hasta el Gobierno Duque que ha acompañado el decurso de la estrategia paramilitar; 3- los ecos del estallido social 2021 con unas masas que pusieron a prueba su capacidad combativa; 4- las dos principales fuerzas proselitistas en la contienda electoral, una de las cuales se situará en la Casa de Nariño a partir del 7 agosto^[1]; 5- con base en lo anterior y a modo de consideraciones finales, se plantean los escenarios que enfrentaría el futuro gobierno de Colombia, sea de derecha o de izquierda.



[1] Hay tres temas que no puede soslayarse en el análisis del cuatrienio presidencial que se avecina: 1- el rumbo y las secuelas geopolíticas de la invasión de Rusia a Ucrania, que amenaza con escalar a niveles de confrontación mundial; 2- la crisis ambiental que tiene en vilo la vida humana en el planeta, de acuerdo a los más recientes estudios de expertos y científicos; 3- la recesión económica mundial que se propaga aceleradamente. Los tres temas implican una profundidad mayor en la reconstrucción analítica y debería reflejarse en trabajos complementarios pues, en una mirada dialéctica y estructural del problema, podrían llegar a ser más determinantes que los acontecimientos de la parroquia nacional. En el presente escrito se reflejan los principales aspectos predominantemente nacionales (entiéndase que “predominante” significa que hay enlaces, en cada tema, con ejes globales).

1. EL URIBISMO Y LA ESTRATEGIA PARAMILITAR EN EL SIGLO XXI

Álvaro Uribe Vélez es retoño y, al mismo tiempo, cultivador del andamiaje paramilitar [2]. Entiéndase por paramilitarismo una estrategia totalizante que articuló actores y prácticas legales e ilegales en todo el territorio nacional con fines capitalistas-imperialistas: políticos profesionales, gamonales y clanes regionales, organizaciones políticas y/o proselitistas, narcotraficantes, terratenientes, comerciantes, profesionales universitarios, transnacionales, industriales, capital financiero, imperialismo y, muy especialmente, el Estado. Estos actores se sintetizaron en una estructura maciza que logró erigirse en conglomerado de poder económico, político e ideológico [3].

Para constituirse en estrategia, el paramilitarismo pasó por diferentes momentos (al margen de sus repertorios de violencia física y directa) cocidos a fuego lento y condimentados con ciclos legales e ilegales desde mediados de los años 60: decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 (legal); la conformación de ejércitos privados contra-insurgentes en defensa de terratenientes con el acompañamiento del aparato militar del Estado (legal); el entrenamiento militar en una hibridación Estado colombiano-imperialismo (legal); la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional (legal); el control paulatino de las administraciones municipales y departamentales vía coacción (ilegal); la conformación de bloques con relativa autonomía operativa y financiera en todas las regiones (ilegal); la unificación en la dirección a

[2] Véase: Álvaro Uribe, las Convivir y los ejércitos paramilitares. (Recorte del debate en el Senado propuesto por Gustavo Petro el 17 de abril de 2007).

[3] La Sentencia de Justicia y Paz a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, a cargo del Magistrado Rubén Darío Pinilla, termina siendo una exposición tácita del paramilitarismo como estrategia: amparado en la definición de contexto, tipificada en el artículo 15 del Decreto 3011 de 2013, sitúa la conjunción de los actores y factores en las escalas regional y nacional que permiten entender el surgimiento, consolidación y expansión del paramilitarismo, a través de redes de relaciones agenciadas por esquemas militares (legales e ilegales), estructuras económicas (legales e ilegales), confluencias políticas y configuraciones ideológicas. Ver: Tribunal Superior Justicia y Paz, Sentencia Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche” (Diciembre 9 de 2014).

través de las Autodefensas Unidas de Colombia (ilegal); la firma de pactos entre políticos profesionales, clanes político-familiares y bloques paramilitares para “refundar la patria” (lo que se ha conocido como “parapolítica), verbigracia Chivolo, Ralito, Pivijay, Marizco, Urabá, Casanare...(legal-ilegal); el apoyo económico y político de escuadrones armados del paramilitarismo para el aterrizaje de Uribe en el poder (ilegal); hasta llegar a la desmovilización “formal” en 2005 con los acuerdos que se plasmaron en la Ley 975, más conocida como “Justicia y Paz” (legal) [4]

El objetivo era uno: reestructurar las relaciones sacionaturales, principalmente en los territorios rurales, adecuándolas a las necesidades de la exacerbación del capital global. Dicho en otros términos y como se retomará más adelante, quitar del camino las formas de vida social que se contrapusieran o no siguieran las lógicas de la extracción acelerada de ganancia y plusvalía. Para ello se requerían varias cosas. En primer lugar, expulsar al campesinado tradicional [5] de los territorios rurales o moldearlo (descampesinizarlo, proletarizarlo...) a las lógicas del capital que se impondría. En segundo lugar, establecer tratados internacionales que facilitaran la implementación del modelo económico postguerra fría de finales del siglo XX (conocido como “neoliberalismo” que, a decir

[4] Diversos autores reconocen en el paramilitarismo una estrategia con niveles densos de enmarañamiento; aún así, no abundan los análisis que reconstruyan al paramilitarismo como una estrategia totalizante, como totalidad concreta con fines capitalistas imperialistas; dicho de otro modo, no se encuentran estudios que desplieguen epistemológicamente la noción de totalidad a través de la cual se revelan los vínculos que hicieron del paramilitarismo una estrategia totalizante, con espesores espaciales que van desde recónditos territorios rurales (micro), pasando por niveles regionales, departamentales y nacionales (maso), hasta llegar a las grandes ligas del imperialismo en Europa, Asia y Norte América (macro). A pesar de esta afirmación, sí pueden leerse trabajos con altos niveles de detalles y análisis, por ejemplo: Raúl, Zelik. Paramilitarismo: violencia y transformación social, política y económica en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Fescol, Goethe Institut, 2015.

[5] Tomando como referencia las formas/modos de producción campesina, es posible clasificar al campesinado de tres maneras: campesinado tradicional, campesinado convencional y campesinado ecológico. El primero, al que se hace alusión en este texto, se refiere a aquel sector del campesinado que produce con prácticas ancestrales, escasa tecnificación, sin uso de agrotóxicos pero sin conciencia ecológica o agroecológica.

verdad, no era más que un traje nuevo para una fase del capitalismo que no salía de su condición imperialista). En tercer lugar, crear una institucionalidad estatal que acoplara a sus políticas el despojo de los territorios rurales y, a la vez, flexibilizara las normativas para la conversión de la naturaleza en botín de capitales de todas las pelambres, a través de lo cual se beneficiaran empresas y empresarios regionales, nacionales e internacionales.

El nacimiento y evolución de esta criatura, tuvo la asistencia de la inefable parturienta de la historia, la violencia, esto es, se dio atropellando los más elementales derechos civiles, recurriendo, con sistematicidad, a execrables repertorios de lesa humanidad y, luego, incurriendo en malabares trampantojos para acceder al poder político de Estado. La evidencia empírica es irrefutable: cerca de 8 millones de personas desplazadas desde 1985 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2018), aproximadamente 10 millones de hectáreas despojadas (Gómez, 2016), un nivel de concentración de la propiedad rural que bordea el 0,90 de acuerdo al índice Gini [6], aunado a la modificación en el uso del suelo rural: a comienzo de los años 90 el sector agropecuario representaba un tercio del PIB y, en la actualidad, apenas roza el 7%.



Producto de la estrategia paramilitar, los territorios rurales quedaron a merced del capitalismo-imperialista, en la cual Uribe, su seguridad democrática y su ideología que fue tomando forma de fascismo, jugó uno de los papeles protagónicos.



[6] Nunca hay consensos en estas cifras; sin embargo, hay dos fuentes que se pueden tomar como referentes. Por ejemplo, con corte a 2017, la Unidad de Planificación Rural Agropecuario reconocía un índice Gini de 0,896 (véase: UPRA, Distribución de la propiedad rural Colombia 2020. En:

www.upra.gov.co/documents/10184/236767/Analisis_Dist_Prop_Rural_2017.pdf).

No obstante, uno de los más grandes expertos en la cuestión agraria en Colombia, Salomón Kalmanovitz, afirma que, si se dejan por fuera los territorios étnicos, el Gini rural llega a 0,95 (Véase, Salomón Kalmanovitz, La enorme concentración de la tierra. El Espectador, 19 de junio de 2016. En: <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-enorme-concentracion-de-la-tierra-column-638741/>). Sea 0,896 o 0,95, la cifra es un retrato macabro del problema de la tierra en Colombia a partir de la estrategia paramilitar.

La cooptación del Estado fue el logro más significativo del uribismo (aunque no de la estrategia) pues, desde allí, se podía cerrar la ciclicidad ilegal de la estrategia paramilitar que había emergido en los años 60 del siglo XX y, en teoría, solo bastaría con la adecuación de condiciones institucionales para la clausura legal de la estrategia con un poder político completamente afín a estos intereses. Auspiciado (económica e ideológicamente) y apoyado (a través de coacción y uso de su aparataje militar) por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el abogado de la Universidad de Antioquia y director de la Aeronáutica Civil en tiempos de Pablo Escobar, Álvaro Uribe Vélez, llega a la Casa de Nariño en 2002 (Verdad Abierta, 2010). Con la máquina del Estado bajo su conducción, la estrategia paramilitar acelera su paso, aprovechando el gran aporte que le hizo Andrés Pastrana a las élites colombianas y al imperialismo: el robustecimiento militar a través del “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado”, más conocido como “Plan Colombia”. La política de seguridad democrática implementada por Uribe durante

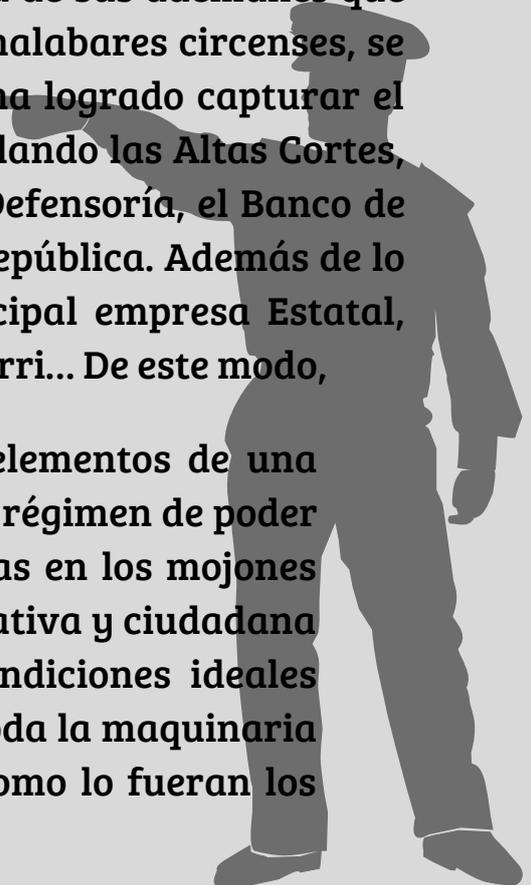
8 años, pudo lograrse gracias al fortalecimiento del aparato militar del Estado producto de los cerca de 7 mil millones de dólares que invirtió la Casa Blanca en esa “empresa” entre 1999 y 2010 (El Tiempo, 2016).

La política de seguridad democrática, que incluyó el debilitamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los asesinatos extrajudiciales (conocidos como falsos positivos), tuvo, en especial, dos grandes acompañantes. De un lado, los acuerdos de desmovilización con las AUC que implicó otorgarles estatus político, creándoles un marco normativo que, presuntamente, sirviera de paraguas para una nación en Paz y cohesionada. Asimismo, la implementación de leyes (todo en el marco de la política de Seguridad Democrática) que generaran “confianza inversionista” y atrajeran recursos de terratenientes, economías extractivistas, sistemas agroindustriales, capital financiero, grandes obras de infraestructura y proyectos minero-energéticos con capitales nacionales e internacionales.

Sobre esta plataforma se apalancó el gobierno de Juan Manuel Santos (el primero de los dos individuos ungidos por Uribe después de sus ocho años de gobierno directo) quien en su primer cuatrienio impulsó sus cinco famosas locomotoras de las cuales solo dos, realmente, prendieron turbinas: minería e infraestructura, es decir, las que se implementaban en los territorios rurales. A la par de sus locomotoras, la otra “gran gesta” del Gobierno Santos fue la negociación con las FARC de la que salió un acuerdo con 7 puntos; el primero de ellos marca las líneas de una reforma rural e integral, esto es, un derrotero para – sobre el papel– democratizar la tenencia de la tierra y proteger al campesinado, pues se entendía que el origen histórico de las violencias en Colombia estaba en la cuestión rural. Valga aclarar que no ha habido tal democratización y los asesinatos al campesinado se han incrementado desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. Todo lo relacionado con el proceso de paz con las FARC, distanció a Uribe y a su creatura partisana, el Centro Democrático, del gobierno Santos.

Así, al final de los dos gobiernos de Santos, Uribe y el Centro Democrático definieron, a través de una especie de reality show cantinflesco, que el nuevo presidente iba a ser Iván Duque, abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Duque, más allá de sus ademanes que se menean entre la egolatría autoritaria y los malabares circenses, se ha constituido en un portento filofascista que ha logrado capturar el Estado, como nunca antes en la historia, controlando las Altas Cortes, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría, el Banco de la República y, lógicamente, el Congreso de la República. Además de lo anterior, quiere dejar en el mando de la principal empresa Estatal, ECOPEPETROL, a su amigo entrañable Luigi Echeverri... De este modo,

el Gobierno de Duque ha juntado todos los elementos de una “tormenta perfecta”, tendiente a constituir un régimen de poder autoritario que ha empezado a sembrar minas en los mojoneros elementales de la democracia liberal, participativa y ciudadana garantizando, a la clase que representa, condiciones ideales para controlar a plenitud el Estado, y poner toda la maquinaria de este órgano al servicio de sus intereses, como lo fueron los reinos medievales (Lince, 2021, p. 116).



No es posible ahondar con este texto en las rutas de continuidad de la estrategia paramilitar, los recovecos que ha trasegado de 2005 al presente (por ejemplo, el papel que han jugado las transnacionales mineras), detallar actores de antes (ganaderos, narcotraficantes) y nuevos actores (la atomización de grupos armados ilegales que operan en las regiones y que han tomado fuerza al punto de paralizar actividades sociales), describir la implementación económica como fin último (el asesinato de miles de personas campesinas que defienden la vida en sus territorios desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC y se contraponen a los cambios en los usos y tenencia de la tierra y la naturaleza rural), entre otros. Lo cierto es que tal estrategia sigue viva, tiene armas, aliados en el Estado e intereses en juego del imperialismo.

2. EL ESTALLIDO SOCIAL 2021: CONTIENDA ESTADO – SOCIEDAD [7]

El Estallido Social fue una auténtica coyuntura política que se dio como resultado de un acontecimiento-detonante originado por el intento de reforma tributaria jalonada por el entonces Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y que fue condensando contradicciones pretéritas: políticas sanitarias autoritarias so pretexto de la pandemia por el Covid-19, la crisis por las presiones de la deuda externa, la corrupción estatal y gobiernos consecutivos de derecha con vigas fascistoides que han tenido hundida en la pobreza a cerca del 40% de la población (DANE, 2022). Todos estos acontecimientos y sentimientos se comprimieron entre abril y julio de 2021, generándose la movilización social más consistente, masiva y prolongada de toda la historia republicana.

A las calles se volcaron durante casi 90 días ininterrumpidos amplios sectores populares quienes, entre manifestaciones cargadas de estética y confrontaciones abiertas, lograron desestabilizar al

[7] Una primera parte de un análisis amplio de los detonantes del Estallido Social 2021 ya fue realizado por quien escribe este ensayo, la versión final se publicó en el volumen 13 de la Revista Kavilando (Lince, 2021)

gobierno Duque, forzando la renuncia de su Ministro de Hacienda, “tumbar” la reforma tributaria y enfrentar violentamente el aparato militar del Estado. Estudiantado, campesinado, profesorado, poblaciones indígenas, comunidades afrodescendientes, entre otros estamentos del pueblo, respondieron con fuerza a los vejámenes de un gobierno ilegítimo que, además, ha sumido en la pobreza, el desempleo y el hambre a millones de seres humanos en toda la geografía de un país que desde comienzos del siglo XX se ha dejado a la buena voluntad del sagrado corazón de Jesús.

La respuesta del gobierno Duque al Estallido social debe leerse en dos grandes bloques: lo que hizo durante las protestas y las jugadas post-estallido. Frente a lo primero, la represión militar, la fuerza del fusil en concreto, marcó la parada. El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue muy claro y contundente (Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2021): se verificaron 278 casos de abuso policial y al menos 27 personas desaparecidas por la fiscalía general de la Nación; se verificaron 46 casos de asesinatos, 44 civiles y 2 policías. De los 44 civiles hay fuertes indicios que 28 fueron perpetrados por la llamada Fuerza Pública, es decir, por el aparato militar del Estado. Se suman, a este repertorio sangriento, 16 casos de violencia sexual cometidos por la Policía Nacional.

Ante los estertores del Estallido y danzando con la bota militar, el Gobierno Duque jugó una importante carta jurídica. Corriendo la cerca de la violencia más allá del uso y abuso del aparato militar, Duque aceleró la formulación de una ley para evitar futuros “desmanes en las protestas”. En diciembre de 2021 –mientras Colombia celebraba la navidad y fetichizaba al niño Jesús y a Santa Claus–, como tantas veces ha ocurrido en la historia de este país, el Congreso de la República, en su cínica magnanimidad, aprobó pasar a sanción

presidencial el proyecto de seguridad ciudadana, con el visto bueno del presidente del Senado, quien afirmó:

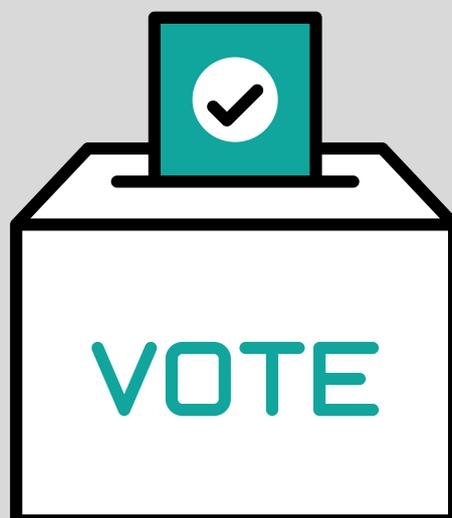
que se realizaron los debates correspondientes, tanto en Cámara como en Senado, así como la discusión del articulado para la aprobación de este proyecto de ley con mensaje de urgencia, y comentó a su vez que esta iniciativa trae las herramientas de carácter administrativo, de carácter penal y judicial para garantizar la seguridad ciudadana en el territorio colombiano (Abisambra, 2021, párr. 1).

El 25 de enero de 2022, Duque sancionó la ley 2197 y lo anunció, de manera rimbombante, con la participación de una recua multicolor de representantes de la institucionalidad estatal que intervinieron validando la necesidad de la ley (Presidencia de la República, 2022. Twitter). En un trabajo futuro que pronto verá la luz (el segundo y tercer artículo acerca del Estallido Social 2021), se abordarán con detenimiento los decretos más castrantes para la protesta social de la llamada ley de seguridad ciudadana. Mientras tanto, basta con tener presente que el Estado cuenta con una ley maleable e interpretable a su favor, para limitar futuros estallidos sociales. Se cuidó de no mencionar las palabras protesta, paro, movilización, vándalo, pero le colgó a la ley luchas y reivindicaciones populares (por ejemplo, sanciones a la violencia intrafamiliar) para matizar su verdadero propósito: debilitar la libertad de expresión y contener el pensamiento contrario a la ideología dominante.

La espuma de la cerveza del Gobierno Duque la constituye la cooptación plena de todos los órganos de control del Estado (Contraloría, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía), la imposición de dignatarios en las altas Cortes, la inclusión de fichas uribistas en el Banco de la República y, por último, el atornillamiento por muchos años en la administración de ECOPETROL a su amigo de peregrinación en Estados Unidos, Luigi Echeverri.

El acontecimiento estallido social y sus ecos inmediatos, ha revelado la verdadera máscara que cubre el rostro de un gobierno que posa de demócrata, que se autopresenta como poseedor de una moral superior para designar el bien y el mal: detrás de esa máscara está el rostro fascistoide que se viene gestando –hoy ya manifiesto, y no en la latencia de las dos décadas anteriores–, claramente, desde la década del 90 del siglo XX. La respuesta del gobierno Duque ante el estallido social fue el uso de las dos formas de violencia propias de un autoritarismo que tiende al fascismo: el fusil que repele y la ley que contiene. Pero también este estallido social reveló la capacidad combativa de las masas, su ímpetu y valentía para plantarle cara a cualquier gobierno con poses autoritarias. Las motivaciones para hacer estallar las calles no solo estuvieron dadas por el hambre, la indignación, la falta de oportunidades y el desempleo. Las masas se arrojaron a marchas brutales porque tienen la valentía de combatir para hacer valer sus derechos aun poniendo en riesgo sus vidas. Sin graduarlo de mártir, el pueblo fue consciente que frente a políticas y mandatos filofascistas, la tibieza es complicidad.

Otra cosa es que en estas luchas haya predominado la espontaneidad: los réditos que pudieron ser mayores si las masas tuvieran armas ideológicas verdaderamente transformadoras, terminaron emparentados con las ilusiones constitucionales, y los sueños de “cambio” quedaron reducidos, en gran medida, a la estrecha boquilla de las urnas y al reformismo.



BIBLIOGRAFÍA

- Abisambra, S (22 de diciembre de 2021). Proyecto de Seguridad Ciudadana pasa a sanción Presidencial. Senado de República. En: <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/3550-proyecto-de-seguridad-ciudadana-pasa-a-sancion-presidencial-2>
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2018). Hay más víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de habitantes en Costa Rica. <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-habitantes.html>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2022). Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. En: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>
- El Tiempo (2 de febrero de 2016) La historia inédita del Plan Colombia a sus 15 años. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16498820>
- Gómez, P. (2 de noviembre de 2016) El gran despojo de tierras se dio en los gobiernos de Pastrana y Uribe. Colombia Plural. En: <https://colombiaplural.com/gran-despojo-tierra-se-dio-los-gobiernos-pastrana-uribe/>
- Jiménez, Y. (14 de marzo de 2022) ¿Qué es el Pacto Histórico? Un vistazo al movimiento más votado en el Congreso. Radio Nacional de Colombia. En: <https://www.radionacional.co/actualidad/politica/que-es-el-pacto-historico-en-colombia-elecciones-2022>
- Kalmanovitz, S. (19 de junio de 2016) La enorme concentración de la tierra. En: <https://www.elspectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-enorme-concentracion-de-la-tierra-column-638741/>
- Lince, W. (2021), Dialéctica del estallido social en Colombia 2021: ecosistema de la contienda política-económica inherente al capitalismo-imperialismo (Primera parte). Contribución al análisis de la coyuntura generada por la movilización popular entre abril y julio de 2021 en Colombia. Kavilando, No. 1, Vol. 13. En: <http://portal.amelica.org/ameli/journal/377/3772803010/>
- Petro, G. (17 de abril de 2007) Álvaro Uribe, las Convivir y los ejércitos paramilitares. Recorte del debate en el Senado propuesto por Gustavo Petro. En: https://www.youtube.com/watch?v=M_WYh8x1-40
- Presidencia de la República (25 de enero de 2022) [@Infopresidencia]. Sanción de la ley de seguridad ciudadana.. En: [Tweet]
- Tribunal Superior Justicia y Paz (9 de diciembre de 2014) Sentencia Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, Radicado: 110016000253-2006-82611. En: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2015/04/09-12-2014-Sentencia-Jesus-Ignacio-Roldan-Perez.pdf>
- Unidad de Planificación Rural Agropecuario-UPRA, Análisis de distribución de la propiedad rural en Colombia Resultados 2017, 2020. En: https://www.upra.gov.co/documents/10184/236767/Analisis_Dist_Prop_Rural_2017.pdf
- Verdad Abierta (29 de abril de 2010) Las AUC apoyaron la campaña de Uribe en el 2002: Mancuso. En: <https://verdadabierta.com/las-auc-apoyaron-la-campana-de-uribe-en-el-2002-mancuso/>
- Zelik, R. (2015) Paramilitarismo: violencia y transformación social, política y económica en Colombia. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Fescol, Goethe Institut.



Tomada de fotoarte: Nayeli Araujo / istock / twitter

PERÚ, UN CANTO DE SIRENA Y UN BÁLSAMO CORROSIVO PARA LA ESPERANZA: APUNTES SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL

JULIÁN ANDRÉS GRANDA MÚNERA*

Perú ocupó en los últimos diez meses un gran interés internacional para las luchas por la emancipación de los pueblos, pero tras este tiempo ha pasado de ser la esperanza política desde abajo de América Latina a la repetición de otro ciclo de decepción. Un bálsamo corrosivo para la esperanza, pero un objeto de análisis muy promisorio para el análisis político.

El actual presidente, Pedro Castillo, se ha ido convirtiendo en un canto de sirena, ilusorio: del discurso de apertura de su mandato acerca del líder que iba a lograr las reformas para llevar al país andino a los tiempos de su segunda independencia, pasó a la continuidad neoliberal del vaso medio lleno que espera gotear un poco hasta poder llegar a la población; apalancado en una reforma agraria sin dientes y periférica.

El desencanto con el actual mandatario obedece a distintos factores. El más común en los análisis de portales políticos como CELAG obedece a la

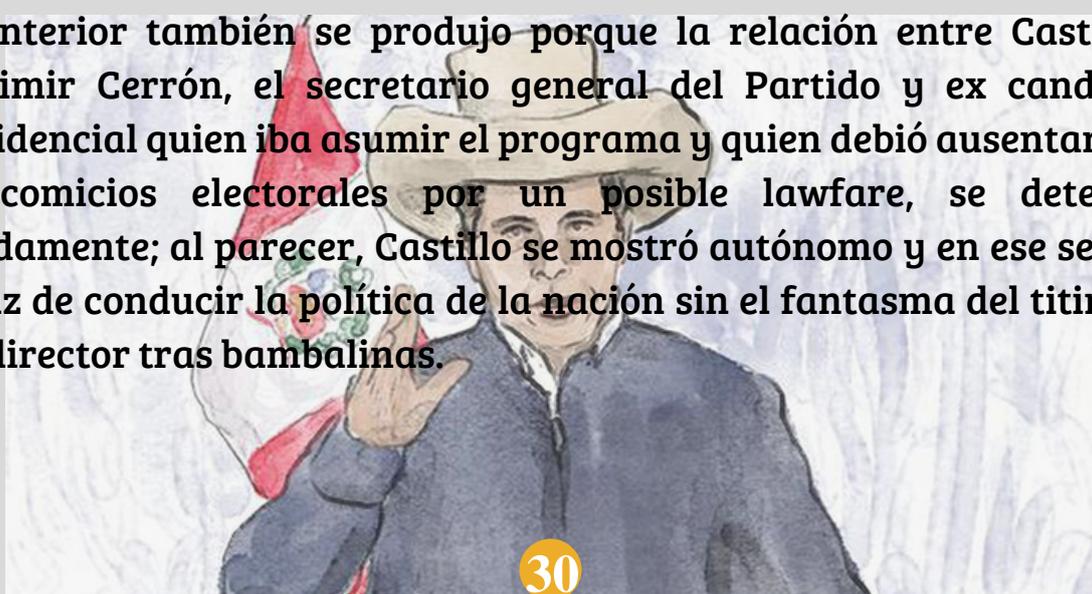
*Sociólogo por la Universidad de Antioquia; Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la línea de investigación Resistencia, Ciudadanía y Conflicto del CELYC y del Grupo de Estudio Marx y América Latina. Correo: juliangrandam@gmail.com

conducción de su cuerpo ejecutivo. Y esto porque a sabiendas que sería perseguido con denuedo por los medios de comunicación y las élites políticas de la burguesía parásita terminó concediendo una porción de la designación ministerial a la derecha reaccionaria y a los independientes algunos de ellos con vinculación histórica al fujimorismo.

Esta línea de análisis también destaca que el viraje fue produciéndose desde que fue entregando el poder en un proceso de negociación a la denominada izquierda caviar, que obedece al grupo político limeño más atado a la ideología de clases medias progresistas y con gustos europeizantes que alcanzó un tercer puesto en la disputa presidencial mediante Verónica Mendoza y que se volcó en la segunda vuelta por Castillo. El primer ministro de economía recibió la bendición de este sector y había estado con los sectores económicos de incidencia del País, Pedro Francke.

Y es que se debe apuntar que, la conducción de Perú Libre, el partido denominado mariateguista por el socialismo, solo tardó dos meses manteniendo la conducción del ejecutivo; pronto la conducción del gabinete, orientado por el movimiento, se rompió y los acuerdos internos por las reformas, así como el proceso constituyente, no logró transformar la correlación de fuerzas que se había catapultado en las elecciones del mes de junio del 2021 y la organización pasó a la táctica por sobrevivir a los ataques por terrucos o pertenecer a Sendero Luminoso y cuestionar al mandatario.

Lo anterior también se produjo porque la relación entre Castillo y Vladimir Cerrón, el secretario general del Partido y ex candidato presidencial quien iba asumir el programa y quien debió ausentarse de los comicios electorales por un posible lawfare, se deterioró rápidamente; al parecer, Castillo se mostró autónomo y en ese sentido capaz de conducir la política de la nación sin el fantasma del titiritero o el director tras bambalinas.



Tras la ocurrencia de estos hechos, puede destacarse que el punto de inflexión se produjo entre los meses de octubre y noviembre del 2021 cuando miembros del partido en el Parlamento, siguiendo la orientación de Cerrón, desaprobaron el tercer gabinete de Castillo, cuyo resultado fue, al final, favorable pues logró salvarlo los votos del Partido atado a Castillo y votos conseguidos y negociados con la derecha y los independientes. La relación estaba hecha añicos.

Por lo anterior, una línea de análisis que viene a suscribirse es que, en la fase actual de la disputa política del Perú, el actual mandatario se encuentra huérfano de organización y sobre esta situación, cabe indagarse por el quid del asunto, cuál es la explicación fundamental que permite la comprensión de un candidato que obtiene una masa de votación considerable en áreas rurales, semiurbanas y urbanas, dotado de un discurso radical de refundación y con una bandera constituyente para el país.

La explicación inmediata proviene de la combinación de dos factores que pueden denominarse como los efectos políticos de la pandemia por COVID 19. Durante el tiempo de confinamiento las resistencias peruanas se concentraron en la disputa en redes sociales contra la biopolítica instaurada y la estupefacción del tipo shock por la inestabilidad gubernamental, que estuvo condicionada por la persecución por corrupción a expresidentes y solicitud de vacancia al ilegítimo Martín Vizcarra, quien asumió el poder cuando Pedro Kuczynski fue destituido. Nadie le dió un voto.

Las resistencias, además, durante este tiempo no lograron generar condiciones para su organización y es condición sine qua non para una consigna refundadora como la Constituyente un cuerpo social que esté



dispuesto a llevarlo a cabo, distribuido a nivel territorial y en condiciones para agitarlo en la vida cotidiana y esto, no se había logrado en la coyuntura del COVID ni mucho menos en el periodo de la coyuntura electoral.

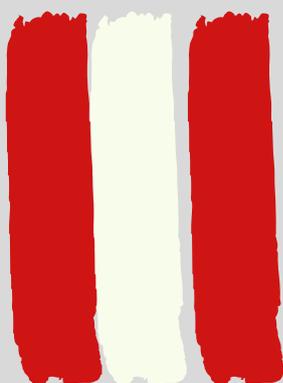
Por supuesto que al hacer un examen sobre Perú Libre se puede encontrar que el movimiento lo viene agitando desde su constitución en el año 2016 pero su extensión nacional y complejidad de organización para el 2021 puede decirse es apocada a pesar de los 200 mil militantes que registra la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas después de las elecciones, algo normal ante el imaginario de un partido victorioso; pero la hipótesis según la cual, las bases del Partido no estaban lo suficientemente desarrolladas en términos de liderazgos y tampoco en términos discursivos para llevar adelante dicha consigna; además, por su corto tiempo de aparición, aunado a su debilidad organizativa puede destacarse que no había logrado generar credibilidad en las masas, ni cuerpo, ni líder.

Con lo dicho anteriormente vamos planteando lo fundamental, la consigna refundacional no tenía la suficiente correlación de fuerzas en la coyuntura electoral; y si bien, en la segunda vuelta presidencial en apariencia había logrado vencer a la candidata del statu quo, Keiko Fujimori, en las elecciones parlamentarias, los candidatos y candidatas no se habían comprometido con la misma y la dispersión del voto por todas las fuerzas políticas la terminó de debilitar amén de la cantidad de parlamentarios logrados por el partido, 37 sobre 130.

Por supuesto también es posible un enfoque centrado en el sujeto. Sobre el cual no es el área rural quien determina sino la incapacidad del presidente en la transición coyuntural de la elección al proceso de construcción política gubernamental, en la que se vió inmerso en trámites de negociación con otras fuerzas políticas en las que se vió solo en la consiguiente estructuración de gabinete y plan de gobierno dejando al garete, solo a través de grupos recolectores de firmas y la tímida discusión en el Parlamento, la consigna refundacional, quien tras más de siete meses en el ejecutivo no logró generar el tipo de organización nacional necesaria para hacerla brillar.

Así, esta desconexión fue llevando al Perú y al presidente al camino sin salida de la negociación que corresponde a la fase de darle capacidad de maniobra a quienes perdieron; y, por lo tanto, estar en la construcción de un gobierno de continuidad que se fundamenta en lo mínimo, la necesidad básica de estabilizar el país a nivel político e institucional de modo que en el periodo de reactivación económica post COVID 19 la resistencia siguiera suspendida por la idea falaz del desarrollo y aumento del PIB que no será otra cosa que la burguesía limeña, la burguesía exportadora de minerales, comerciales y productos alimenticios, pescados, mariscos sigan ganando en la ventaja comparativa mínima de la economía nacional mientras los demás siguen esperando que la riqueza nacional se siga posponiendo para llevar adelante procesos de crecimiento planificado.

A pesar de lo anterior, cómo en muchos países de América Latina, las resistencias civiles están ante la encrucijada y la complejidad que no logran dirimir en un proyecto histórico nacional con fuerza en las masas y tendrá que pasar un tiempo a nivel interno para la recuperación de una consigna refundadora en el Perú, porque dadas las condiciones actuales de la lucha política no se logra entrever organización, ni liderazgos consolidados ni agitación para lograr la neutralización de la burguesía y la gestión distinta de la nación y tanto el presidente, como el partido tienen mucho que ver en esa explicación que hoy nos ha puesto a pensar en ese proceso como el canto de sirena de una isla insondable que no se logró decantar.





EL GIRO A LA IZQUIERDA EN DOS PAÍSES DE LA ALIANZA PACÍFICO: MÉXICO Y CHILE.

Marco Antonio Vélez Vélez*

Como se sabe la Alianza Pacífico como mecanismo de integración económica, que busca una articulación de naciones latinoamericanas con el Asia Pacífico, está conformada por cuatro naciones: México, Chile, Perú y Colombia. Algunas otras naciones han solicitado adhesión a la misma, es el caso de Ecuador. Pero, las cuatro naciones mencionadas vienen desde 2011 conformando un bloque económico de integración, que ha logrado ciertos avances en cuanto a comercio internaciones y levantamiento de aranceles protectores, según los mecanismos clásicos del libre comercio. Este tipo de alianza económica no ha demandado de sus países miembros homogeneidad política. De hecho, sus regímenes de gobierno han oscilado desde [1]: alternativas de izquierda como la de López Obrador en México, pasando por los gobiernos de derecha, de Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia y los bruscos cambios de presidentes en el Perú. El Acuerdo Marco de la constitución de la Alianza del Pacífico, solo obliga formalmente a respetar la democracia y el Estado de Derecho, allí caben diversas expresiones de regímenes políticos. Es evidente, que algunas de estas alianzas o acuerdos comerciales suponen en ocasiones compartir una misma visión ideológico-política. Es el caso del ALBA -Acuerdo Bolivariano para las Américas- liderado por Venezuela que acogió a los

*Filósofo y doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, miembro de la línea Globalización, regionalización y procesos de integración en América Latina del CELyC y profesor del Departamento de Sociología UdeA. Correo: marco.velez@udea.edu.co

[1] De hecho, el Acuerdo Marco es firmado por: Juan Manuel Santos por Colombia, Felipe Calderón México, Sebastián Piñera Chile y Ollanta Humala Perú. Es decir, gobernantes de la derecha: Chile y México, de la centro derecha, Colombia y de la izquierda, Perú.

los regímenes de izquierda en América Latina. La Alianza del Pacífico ha tenido como ya se vio, menos homogeneidad en cuanto a formas de régimen político.

Pero se trata de evaluar el destino político reciente, en términos electorales de algunos países de la Alianza del Pacífico y mostrar cómo los vaivenes de los resultados electorales pueden afectar o no, las dinámicas del acuerdo comercial. En principio, se trata de evaluar, cómo la transición en México hacia el gobierno de izquierda de López Obrador y en Chile al gobierno de izquierda de Boric han generado –o pueden generar, dada la reciente posesión del mandatario de los chilenos- posibilidades de desarrollo o de freno en los intercambios comerciales entre los países miembros. Y, a su vez, cuál ha sido el papel del Gobierno colombiano de Iván Duque frente a potenciar o no el citado acuerdo, partiendo de su clara opción por un proyecto neoliberal en lo económico. Pero, de otro lado es importante mostrar que los cambios en la forma del régimen político propician o acentúan virajes en la concepción de esta alianza comercial. Es evidente que, hasta el presente, la Alianza del Pacífico se ha jugado más en términos de intercambios económicos que de otro orden. Añadiendo quizá, la facilitación de pasantías y becas de estudiantes como elemento de concreción de la alianza en términos culturales. Y ello en consonancia con lo mencionado, este tipo de alianzas y acuerdos se juegan más en el nivel de lo comercial y del libre flujo de mercancías, capitales y personas.

1. MÉXICO, LÓPEZ OBRADOR Y EL SUPUESTO “GIRO A LA IZQUIERDA”.

El miembro más fuerte en lo económico en la Alianza del Pacífico es México. Con la llegada al poder de Manuel López Obrador, se consuma un giro a la izquierda en el país azteca, luego de la desafortunada gestión de Peña Nieto. Gestión neoliberal que mantuvo los ejes de la liberalización económica y cuya gobernabilidad se vio afectada por denuncias de corrupción. Los resultados económicos del Gobierno de López Obrador han sido importantes, incremento sostenido del salario

mínimo, entrada de remesas del exterior por US 51 mil millones en 2021, crecimiento de las reservas internacionales, austeridad en el gasto por parte del ejecutivo. No logró incrementar la producción de petróleo a 2 millones de barriles como prometió, pues, la producción solo llegó a 1.5 millones de barriles, cuando Peña Nieto la había dejado en 1.8 millones de barriles. Llegó a enunciar “que el petróleo es el mejor negocio del mundo” a contracorriente de tendencias progresistas que apuntan a generar energías alternativas y limpias, en el camino de la descarbonización de las sociedades. La pandemia le pasó factura como a todas las naciones, el decrecimiento de la economía estuvo en niveles del 8.2% en 2020. Se proyecta para este año y como efecto del rebote económico un crecimiento del 6.2% del PIB.



El respaldo popular a la gestión de López Obrador ha oscilado en cifras cercanas al 60%. Sin embargo, su manejo de la pandemia no fue quizá el más afortunado apelando a fórmulas espirituales y no a la ciencia para controlar los efectos del covid-19. Aunque el apoyo a los sectores más desfavorecidos por un valor de US 750 dólares fue significativo –comparado con la irrisoria cifra de \$ 160.000 que otorgó el Colombia el gobierno Duque

- . Notas deficitarias en su gestión han sido el incremento de la pobreza de un 41% a 43% y la violencia asociada al narcotráfico y los feminicidios. Su posición sobre los migrantes ha sido cuestionable, cumpliendo un papel de contención de la migración cuando ello le fue exigido por el gobierno de Trump, ubicando 2.400 guardias nacionales en la frontera con Guatemala.

Ramón Centeno profesor de la Universidad de Sonora caracteriza al gobierno de AMNLO como “progresismo fallido” (Centeno, 2021), es un tipo de gobierno que ocupa el vacío político dejado por la izquierda marxista y que no rompe radicalmente con el neoliberalismo, aunque

se presente en su versión posneoliberal como le gusta decirlo a López Obrador. Es un centro político que tiende a la derecha dado el fortalecimiento del ejército y la tendencia a centralizar funciones en el ejecutivo. Es incluso menos progresista que los gobiernos progresistas sudamericanos. En cuanto a lo internacional mantuvo sin cuestionarla su relación con la Alianza del Pacífico cuando esta estuvo manejada por gobiernos neoliberales en Colombia, Chile y Perú. Será necesario explorar cómo se dará dicha relación ahora con gobiernos de izquierda, por lo menos en Chile, y con la incertidumbre de la continuidad de Pedro Castillo en el Perú.

El pasado 11 de abril AMLO se jugó la alternativa de un referendo revocatorio en el cual salió ganador, al obtener un respaldo del 90%, aunque el nivel de participación fue bajo, pues, no llegó al 18% del potencial electoral, cuando se requería un 40% para garantizar su validez. Esto le da un margen al gobernante mexicano para culminar su mandato en 2024. Y es el signo preocupante de un bonapartismo plebiscitario, dada la concentración de poder en el ejecutivo.

2. CHILE: BORIC Y LA LLEGADA AL PODER DE UN GOBIERNO DE IZQUIERDA.

Gabriel Boric llega a la presidencia de Chile como expresión de un gran anhelo de cambio social, puesto en la escena política a partir del estallido social de 2019, que puso en jaque al gobierno de Sebastián Piñera. Boric es la concreción de esa expectativa de cambio que emergió en el movimiento estudiantil chileno en la primera década del presente siglo. El movimiento de los pingüinos estuvo tras la exigencia de reformas a la educación pública y allí se forjaron liderazgos como los del hoy presidente y la figura de Camila Vallejo, hoy vocera del nuevo gobierno. Boric encabezó el movimiento “Apruebo Dignidad” en tanto opción de poder y gobernabilidad. Sus ejes temáticos fueron: feminismo, transición ecológica, descentralización y trabajo decente. Desde dicho movimiento logra derrotar en segunda vuelta al derechista José Antonio Kast, al lograr el 55% de los votos depositados –aunque en la primera vuelta el triunfo fue para Kast-.

Sus primeros hechos de gobierno han sido significativos. Nombró un gabinete mayoritariamente femenino, 14 mujeres y 10 hombres. Nombró a una mujer, Iskia Siches como Ministra del Interior y a Maya Fernández, nieta de Salvador Allende como Ministra de Defensa, en un mensaje claro de ruptura con el pasado pinochetista. Las expectativas se ciernen sobre este gobierno de izquierda, del cual se esperan reformas esenciales: en la salud, en la educación, en las pensiones y los derechos de las minorías. Sus propuestas programáticas se han movido allí, abriendo espacio a cambios necesarios en la sociedad chilena. Un régimen de pensiones público dando fin al negocio de los privados. Una reforma tributaria progresiva y que grave a los más ricos, una condonación de las deudas de los estudiantes, al entender la educación como un derecho. Las tareas son múltiples y las masas chilenas, los movimientos sociales no dan espera para las transformaciones. De allí unas dificultades iniciales del gobierno de Boric. Su Ministra del Interior

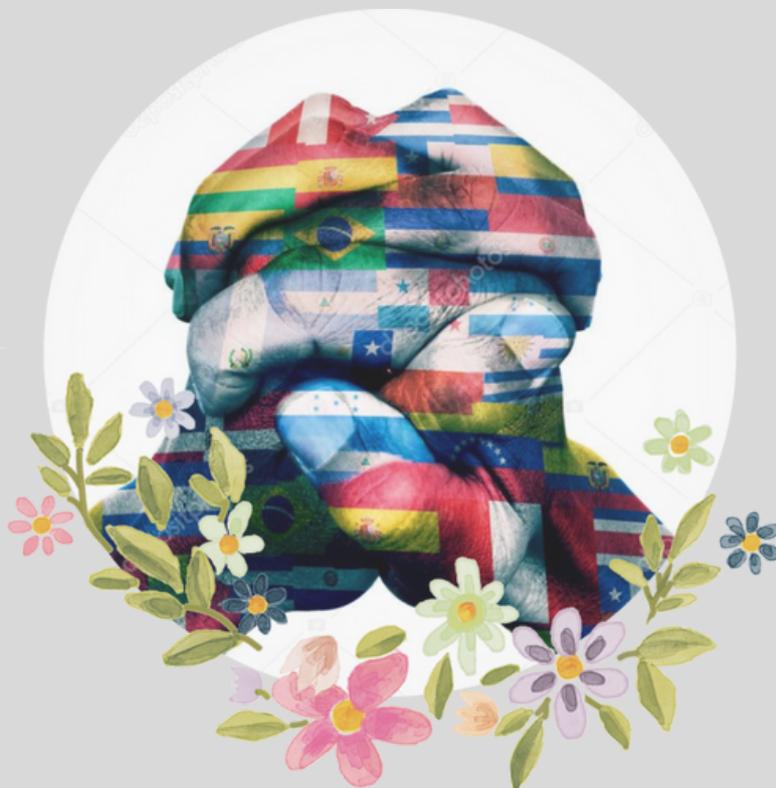
no fue bien recibida en un pretendido diálogo con los mapuches, pueblo originario que busca soluciones. Y algunos sondeos muestran que la opinión no está apoyando de una manera decidida algunos cambios anunciados por la convención constituyente que debe dar lugar a una nueva carta política, que sustituya la constitución de Pinochet.



Se podrá esperar de Boric que este un poco más a la izquierda que el gobierno de López Obrador, que su talante de giro a la izquierda sea más coherente. Su opción no es la de un “progresismo fallido” como en el caso de AMLO. Aunque no es posible concebir tampoco una ruptura radical con la economía de mercado y las lógicas del capital. Se trataría más de una forma de socialdemocracia clásica, que gestiona reformas antineoliberales. Eso, sin embargo, es un avance importante para la sociedad chilena y configura un nuevo escenario para otras opciones de izquierda en América Latina.

BIBLIOGRAFÍA

- Centeno, Ramón I. (2021). López Obrador o la izquierda que no es. México: Revista Foro Internacional, vol.61, No 1, enero/marzo.
- Programa de Gobierno “Apruebo Dignidad”, en línea: bcn.cl/historia-politica/resenas_biograficas/wiki/Gabriel_Boric_Font





SIN MUJERES NO HAY DEMOCRACIA

Lina Marcela Marín Gómez*

La pandemia ha sido un factor agravante de las desigualdades sociales, políticas y económicas que les son inherentes al desarrollo del modelo económico neoliberal en América Latina. A partir del 2020 se ha llevado a cabo una profundización de la crisis sistémica a nivel mundial que puede leerse a la luz de un reacomodo del sistema en términos socioeconómicos y políticos. En esta línea, durante los últimos años en países como Colombia se ha llevado a cabo un proceso de intensificación de los conflictos y desigualdades representados en diferentes ámbitos de la vida social.

Por un lado, nos encontramos frente una profunda crisis ambiental, producto de la forma hegemónica de establecer una relación seres humanos-naturaleza que recae en lo que se ha conceptualizado como la segunda contradicción capitalista en términos capital-vida. Es decir, las condiciones depredatorias del capitalismo acaban con la fuente que hace posible su existencia, la tierra y los seres humanos. En este sentido, el despojo, la profundización del modelo extractivista, la contaminación de las fuentes de agua, la tala de árboles nativos y un largo etcétera, provoca y mantiene la crisis ambiental como un elemento profundizador de las desigualdades sociales en relación con el acceso a los bienes comunes básicos vitales para reproducir la existencia.

*Socióloga de la Universidad de Antioquia. Estudiante de maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece a la línea Cultura, Pensamiento Social y Ciencias Sociales en América Latina del CELyC . Correo: linamaring.13@gmail.com

En segundo lugar, durante la pandemia la crisis social se vio representada en el Paro Nacional que se llevó a cabo en el país durante el 2020 como continuidad a la movilización del año anterior; ésta ha sido considerada la movilización social más fuerte de los últimos años, aglutinando diversas demandas sociales que en términos amplios reclaman la construcción de una sociedad más justa. La reacción del Estado a la protesta fue principalmente militar a través de represión, persecución, estigmatización y asesinato de jóvenes, lo que dejó a la vista la poca voluntad política para el diálogo y busca de soluciones a las demandas sociales. Uno de los temas centrales que convocó la movilización fue la agudización de la pobreza en el marco de la pandemia y la respuesta ineficaz por parte del Gobierno para atender la misma, de ahí que durante el 2020 el Gini

“subió a 0.54 y eso provocó que 3.6 millones de colombianos pasaran a ser pobres en un solo año; que en Colombia una mujer tiene 1.7 más probabilidades de ser desempleada que un hombre, y un habitante del departamento de Chocó, de mayoría afrodescendiente, tiene cinco veces más probabilidad de nacer en la pobreza que uno de Bogotá; también, que la desigualdad en Colombia se hereda de una generación a otra: el hijo o hija de un persona pobre lo será en su adultez; finalmente, que superar esto podría llevarle al país más de treinta años” (Vargas, 05 de noviembre de 2021).

Ligado a lo anterior, nos encontramos en un incremento de la desconfianza hacia la institucionalidad y, por ende, la representatividad política. En este sentido, de acuerdo con las últimas encuestas de Invamer, el presidente del país tiene una desfavorabilidad del 73%, (El Espectador, 17 de febrero de 2022), lo que da cuenta del panorama de crisis de representación que se agudizó en este periodo de tiempo.

Por último, la pandemia también significó un aumento de las violencias hacia las mujeres. Tal como lo han analizado algunas economistas, las mujeres son “las más pobres entre los pobres”, la feminización de la pobreza es un hecho tanto en zonas urbanas como rurales de América Latina. En este sentido, no sólo se evidencia un incremento de la violencia de género representada en un aumento de casos de violencia sexual, psicológica y en los hogares, sino también en las barreras para el acceso de las mujeres a espacios de trabajo formal, lo que implica un aumento del trabajo no remunerado o trabajos de cuidado.

De tal manera, en todas las dimensiones de la vida social la pandemia ha significado un fuerte retroceso para alcanzar básicos que garanticen una vida digna para las mayorías sociales y en el caso concreto de las mujeres ha implicado un aumento de las brechas para alcanzar la equidad. En el ámbito del trabajo es muy representativa la manera en que aumentan las desigualdades, profundizando la dualidad entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, éste último realizado especialmente por mujeres.

Mientras el primero aparece como creador de valor, el segundo, la reproducción, aparece como creador de no-valor. La producción de mercancías se muestra entonces como lo fundamental en la producción capitalista, y las leyes que la gobiernan como las leyes que caracterizan el sistema mismo. Entre tanto la reproducción aparece como producción ‘natural’ (Vega, 2021, Pp. 90 -91).

Es decir, “naturalmente” realizado por mujeres, asociado a su condición de género y a los roles/labores que se espera realicen en el marco de este sistema capitalista. La idea que el trabajo reproductivo no crea valor es uno de los justificantes para el no reconocimiento e invisibilización del trabajo de las mujeres, esta es una falacia



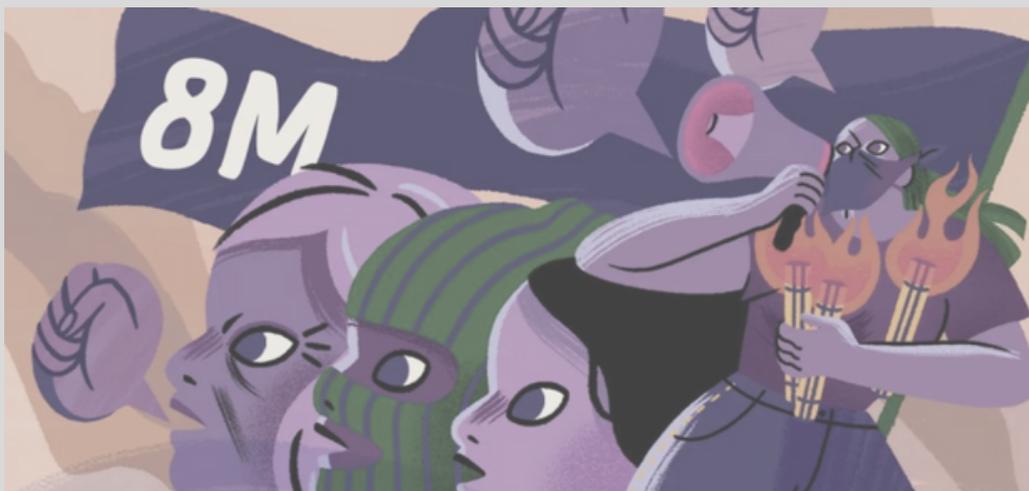
en tanto el trabajo llevado a cabo dentro de los hogares sostiene la vida en el sentido más amplio y básico del término: alimentar, vestir, cuidar física y emocionalmente, etc, son labores que reproducen la vida a la vez que sostienen el trabajo remunerado.

Lo expresado hasta aquí posibilita subrayar dos elementos centrales: en primer lugar, estamos en un contexto de agudización de las problemáticas sociales existentes en el país expresada en la profundización de las desigualdades sociales, la violencia hacia las mujeres, la pobreza y pocas garantías para la vida digna; en segundo lugar, nos encontramos en el marco de un proceso electoral relevante en un doble sentido, la movilización en las calles ha sido una expresión contundente de la inconformidad social respecto al modelo político y económico que ha gobernado durante las últimas décadas a la vez que representa un reto respecto a las formas tradicionales del ejercicio de la política y la manera en que desde lo institucional se podrían plantear soluciones a corto,

mediano y largo plazo. De tal manera, el punto central que abordaré a continuación a partir de estos elementos es que no es posible alcanzar la democracia sin la participación activa de las mujeres con proyectos políticos que vayan en línea de alcanzar la justicia social.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es un secreto que la participación de las mujeres en procesos electorales es muy reducida a la vez que invisibilizada debido a la manera en que está organizada la sociedad bajo un orden de género que plantea que el espacio público y de lo político en el sentido institucional no es un espacio para las mujeres. Las barreras sociales, culturales, económicas se ven reflejadas en los procesos electorales y muy especialmente en la ocupación de espacios de poder y toma de decisiones.

En el Congreso, por ejemplo, las mujeres ocupan el 21% del Senado y 19 % en la Cámara de Representantes (El Tiempo, 20 de diciembre de 2021). De las candidaturas legislativas actuales, las mujeres representan el 39%, y algunas han denunciado pocas garantías de seguridad para llevar a cabo las campañas electorales, así como desigualdad económica respecto al financiamiento del proceso electoral. Respecto a las presidenciales, se encuentran solamente en las listas las candidatas Francia Márquez, Arelis Uriana e Ingrid Betancuort, en relación con la larga lista de hombres candidatos en todas las coaliciones. A nivel regional, Colombia ocupa el noveno lugar respecto a la participación política de las mujeres en parlamentos bajo el siguiente orden: Haití (0%), Santa Lucía (11,1%), Antigua y Barbuda (11,1%), Belice (12,5%), Brasil (14,8%), Paraguay (17,5%), Bahamas (18%) y San Vicente y las Granadinas (18,2%) (Becerra, 08 de marzo de 2022).



Cabe mencionar que en el ejercicio de lo político-electoral resultan evidentes determinadas violencias hacia las mujeres que tienen como fin mantener el orden de género, resaltando que el trabajo por excelencia que pueden o deben realizar son los de cuidado ligados a la reproducción. Por lo tanto, Juliana Hernández directora de Artemisas (organización que trabaja en la construcción de agendas políticas con enfoque de género) planteó en una entrevista que algunos de los obstáculos que encuentran las mujeres para llegar a espacios de toma de decisiones son las violencias y entre estas, la organización ha

BIBLIOGRAFÍA

Becerra, B. (08 de marzo de 2022). Colombia tiene uno de los diez parlamentos con menor participación femenina de la región y el tercero entre países de Suramérica. En: La República. Disponible en: <https://www.larepublica.co/globoeconomia/paises-de-america-latina-que-tienen-menos-representacion-femenina-en-el-congreso-3317706>

El Tiempo. (20 de diciembre de 2021). El panorama de paridad de género en las listas al Congreso. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/politica/congreso/mujeres-en-las-listas-al-congreso-para-las-elecciones-de-2022-640191>

El Espectador. (17 de febrero de 2022). Aumentó pesimismo generalizado y desaprobación de Duque, según encuesta invamer. Disponible en: <https://www.elespectador.com/politica/aumento-pesimismo-generalizado-y-desaprobacion-de-duque-segun-encuesta-de-invamer/>

Vargas, L. (05 de noviembre de 2021). A Colombia le tomará 30 años superar la desigualdad. En: Gatopardo. Disponible en: <https://gatopardo.com/noticias-actuales/a-colombia-le-tomaria-30-anos-superar-la-desigualdad/>

Vargas, L. (03 de enero de 2022). La exclusión de las feministas en las elecciones de Colombia. En: Gatopardo. Disponible en: <https://gatopardo.com/noticias-actuales/pacto-historico-mujeres-feministas-elecciones-colombia/>

Vega, C. (2021). Rutas de la reproducción y el cuidado por América Latina. Apropiación, valorización colectiva y política. En: La vida en el centro: feminismo, reproducción y tramas comunitarias -Mariana Menéndez Díaz y Mariana García Compiladoras- México: Bajo Tierra

79.695.786
HASTA LA CÉDULA
79.703.241

190

Tomado de Elecciones Colombia CNN Español

CONTIENDA ELECTORAL EN COLOMBIA 2022: ENTRE LA CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA PARAMILITAR Y LAS ILUSIONES REFORMISTAS (SEGUNDA PARTE)*

Wilmar Lince Bohórquez**

1. LA CONTIENDA POR LA CASA DE NARIÑO 2022

De este modo, la disputa por el solio presidencial se ubica (se reitera: tomando como referencia aspectos nacionales) entre las secuelas del Estallido Social 2021 y un Estado que ha sentado las bases (especialmente desde los años 90 del siglo XX) para un ejercicio de poder autoritario tendiente al fascismo. En este escenario se encuentran los dos bloques políticos con opciones de triunfar en las urnas: una derecha amalgamada donde confluye el uribismo y una izquierda socialdemócrata-reformista alimentada por diversas expresiones ideológicamente liberales-progresistas. No da el espacio en esta edición para adentrarse en los antecedentes políticos de quienes están al frente de estas dos expresiones políticas. Por ello, este ejercicio se limitará a dar cuenta de lo que actualmente constituyen la una y la otra.

*Este texto es la segunda parte del trabajo publicado en este mismo número sobre la contienda electoral colombiana de 2022.

**Sociólogo, profesor del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia. Coordinador del Grupo de Estudio y Semillero Método Marxista y Teoría Crítica Radical. Coordinador Línea de Investigación Problemas Rurales y Ruralidades, adscrita al Grupo Redes y Actores Sociales.

La forma de la derecha, su superficie, tiene la fisonomía de la “estirpe paisa” con Federico Gutiérrez como cabeza visible. “Fico”, como se le conoce en el mundillo de la política electorera, se impuso en la consulta del denominado “Equipo por Colombia”, en el cual estaban exalcaldes ciudadanos y congresistas de centro derecha, incluyendo al clan Char. Como lo habían previsto algunos analistas [1], Uribe y el Centro Democrático sabían del desprestigio de cualquier candidato salido de este partido y previendo un ridículo en las urnas, allanaron el camino para que toda su maquinaria se adhiriera a los piñones de la de Fico.

Con el clan Char y el Partido de la U ya en su inventario, de a poco se fueron plegando otros partidos y organizaciones políticas: conservadores, élites liberales y Cambio Radical. Sin importar si Gutiérrez es o no el tercer ungido de Uribe, representa el ideario uribista y lo que se ha sintetizado como tendencia filofascista durante el gobierno Duque. Tal cosa no solo por las gravitaciones politiqueras de derecha que se han establecido alrededor de su campaña, sino porque su propuesta de gobierno así lo define de entrada: orden y oportunidades (entiéndase progreso) (Gutiérrez, 2022).

No dice este programa que continuará con la tarea de hacer trizas los acuerdos con las FARC –tal como lo pregonó y cumplió el actual gobierno– sino que los implementará, en especial, fortaleciendo el Fondo de Tierras, los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, en la propuesta y sus discursos de campaña hay dos avisos que son preludio de un futuro poder de Gutiérrez y compañía: Colombia es un país donde la violencia se ha incrementado y está en riesgo la democracia. La solución para ello, de acuerdo a este conglomerado de derecha y tal como ocurrió en los comicios presidenciales de 2002, es un gobierno que imponga el orden a través del fortalecimiento del aparato militar y una superestructura jurídica que blinde a un gobierno de este corte.

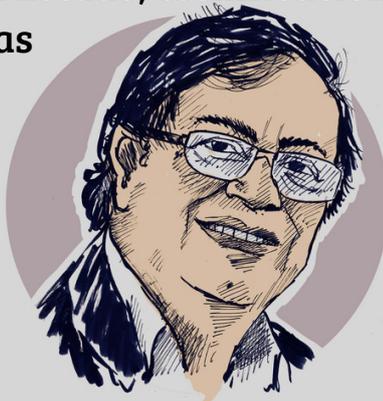


[1] Por ejemplo, Coronell (2021).

Sí, como se mencionó en el apartado anterior, Duque ha dejado todas las condiciones para que opere, con adecuaciones estatales, un poder gubernamental de corte ya no autoritario sino fascistoide (que, si lo requiriera, actúe sin conmisericordias ante posibles estallidos sociales), Gutiérrez y, especialmente, sus satélites y componentes abstractos (es decir, lo que está en el fondo de la figura superficial de “Fico”), tendrán un cheque en blanco para lograr sus cometidos.

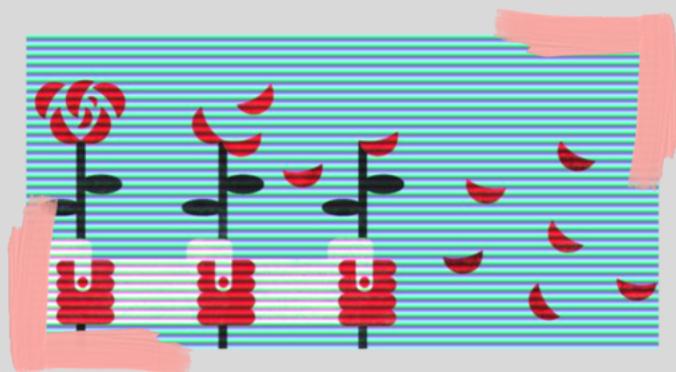
Por su parte, Gustavo Petro encabeza el llamado Pacto Histórico en el cual, como se mencionó desde el inicio, convergen diversas expresiones liberales, progresistas y socialdemócratas. Igualmente, recoge expresiones sociales de las que participaron en el Estallido Social 2021. Petro se impuso de forma aplastante en las primarias de este movimiento político. Le siguió Francia Márquez, mujer afro que se reivindica feminista, reconocida por su defensa a los derechos humanos y al medio ambiente. Al final de algunas tentaciones por nombrar una candidatura vicepresidencial proveniente de otros sectores políticos, Petro se decanta por Márquez. Así, Petro y Márquez conforman una dupla que ha renovado la esperanza de “cambio” en sectores populares campesinos, indígenas, afros, jóvenes, estudiantes, docentes, pequeños comerciantes, intelectuales...

Pero, ¿Qué cambio representan el Pacto Histórico, Petro y Márquez? En palabras del mismo Petro, su propuesta consiste retomar la “revolución en marcha” que iniciara López Pumarejo en 1934. En las tesis de Petro y en lo que coincide Márquez, la revolución en marcha consiste en el proceso de modernización del Estado, tecnificación de la agricultura y la industria, generación de vías adecuadas a una nación productiva, educación que forme sujetos para una nación moderna, entre otros (Petro, 2022a).



A lo anterior se suma una idea de restauración de la democracia. En efecto, en la propuesta de gobierno, Petro y Márquez plantean la profundización de la democracia, con la participación en cargos burocráticos del 50% de mujeres y “nutriéndose de las perspectivas y enfoques feministas y antipatriarcales” (Petro y Márquez 2022b, p. 9). Pasaría desapercibida la alocución 'profundización de la democracia' si no fuera porque Federico Gutiérrez (“Fico”), los medios de comunicación áulicos de su candidatura y el uribismo pregonaran que, Petro y el Pacto Histórico, representan un peligro para “la democracia” –le faltaría el apellido “burguesa”– y que sus “ideas socialistas y comunistas” llevarán a Colombia a un desbarrancadero [2]. La idea política de profundización de la democracia, tiene puntos de enganche con las tesis que desde finales del siglo pasado vienen vertiendo Ernest Laclau y Chantal Mouffe (a quienes se les reconoce en el mundo académico como “postmarxistas”) y que se han conocido como “democracia radical” o “radicalización de la democracia” (Laclau y Mouffe, 1987). Estas tesis tuvieron incidencia en los gobiernos de Bolivia con Evo Morales y el Ecuador presidido por Rafael Correa.

El análisis de semejantes tesis requeriría una amplitud que este trabajo no tiene. Por ahora, solo es posible decir que los acercamientos al marxismo de Laclau y Mouffe no alcanzan estatus revolucionarios en el sentido clásico del materialismo histórico y la palabra “radical” no indica destrucción plena y de raíz del modo capitalista de producción a través de una revolución omnímoda con la fuerza (científica, política, organizada, internacionalista) del proletariado como sujeto histórico.



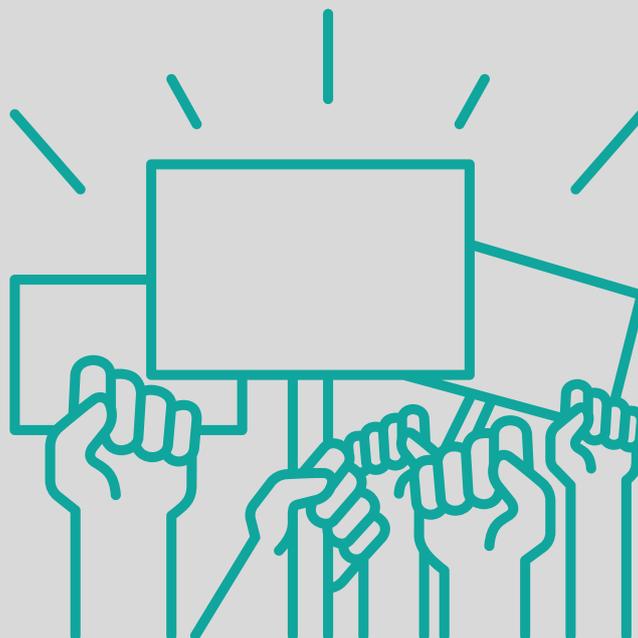
[2] Uno de cientos de ejemplos que se pueden verificar en la web: Jenny Rocío Angarita, Gustavo Petro pone en riesgo la democracia y es un salto al vacío: Fico Gutiérrez (28 de febrero de 2022). RCN Radio. En: <https://www.rcnradio.com/politica/gustavo-petro-pone-en-riesgo-la-democracia-y-es-un-salto-al-vacio-fico-gutierrez>

Petro, Márquez y el Pacto Histórico no tienen un ápice de socialistas, menos de ideas comunistas y todavía menos reivindican o representan ideologías revolucionarias (ni de las utópicas ni de las científicas). No proponen, por ningún lado, transitar de la propiedad privada a la propiedad social (no expropiarán nada más allá de lo que la misma ley contempla en función del bien común); el poder político temporal es el fin en sí mismo y no un camino para destruir todas las formas de opresión incluyendo el Estado[3]; tampoco está dentro de sus idearios destruir las relaciones sociales basadas en el capital (no tienen la más mínima posibilidad de “perpetuarse en el poder”); no planean romper vínculos con el imperialismo. Su ideario de profundización de la democracia en cuanto a lo rural llega hasta la propuesta de implementación del punto uno de los acuerdos con las FARC, o sea, ejecutar una Reforma Rural Integral que entregue tierras despojadas al campesinado y proteja la producción campesina, sumado a aperturas democráticas liberales. Propone, también, transitar de una matriz energética basada en combustibles fósiles a invertir en energías limpias acorde a la crisis ambiental, lo que no significa borrar de tajo la extracción de petróleo y carbón; asimismo, la profundización de la democracia de este grupo político, proyecta pasar de un modelo económico mayormente especulativo-financiero hacia una economía soportada en la producción industrial-agrícola. En últimas, profundizar el capitalismo en sus expresiones políticas, culturales y económicas.

[3] De allí aquella consigna que viene gestionando un facción del Pacto Histórico: “de la resistencia al poder hasta que la dignidad se haga costumbre”...En ningún momento, “de la resistencia al poder revolucionario hasta destruir las clases sociales, las relaciones de producción que se erigen asociadas a las clases, las relaciones sociales basadas en el modo de producción de clases y las ideas que predominan en una sociedad de clase”. También hay que reconocer que esta meta es más amplia, más compleja, verdaderamente radical y tiene alguna posibilidad de realizarse por una vía distinta al camino ilusorio de la democracia burguesa, vía elecciones.

Aun así, no debe despacharse el Pacto Histórico simplemente señalándole de reformista aunque, en efecto, lo sea. En términos sociológicos, tendría que considerarse que este movimiento ha sabido captar los sueños de millones de personas sumidas en la miseria, que han padecido los vejámenes de 20 años de dominio uribista más cincuenta años de estrategia paramilitar y, al mismo tiempo, que probó su firmeza para enfrentar al Estado en el Estallido Social 2021. Al interior del Pacto Histórico hay expresiones que provienen de luchas y movimientos sociales que han enfrentado desde sus territorios al imperialismo y al Estado, resistiendo para no ser borrados de la historia.

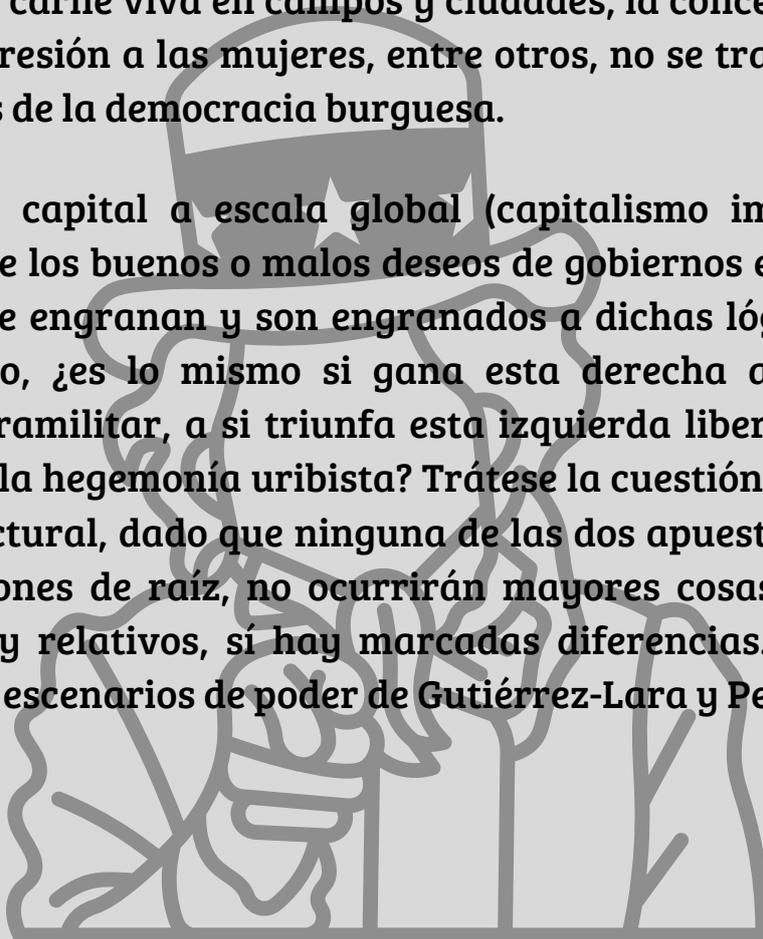
En síntesis, el Pacto Histórico es liberal, reformista, con matices socialdemócratas, no tiene un atisbo de socialismo o comunismo; se tongonea –como lo escribiera Balzac aludiendo al joven provenzal– entre la hipocresía liberal-democrática y la preservación de la herencia como base. Todo esto es cierto y, a pesar de ello, ha ganado una simpatía inusitada en amplios sectores de las masas, contando entre sus filas con pueblos beligerantes y resistentes cuyos comportamientos son inciertos en cualquier escenario de poder: esta base social con huella de resistencia, muy seguramente, se enfrentará a un gobierno de corte fascista o a un gobierno progresista que le defraude.



CONSIDERACIONES FINALES: UNA LECTURA DE LOS ESCENARIOS FUTUROS Y LAS TENDENCIAS

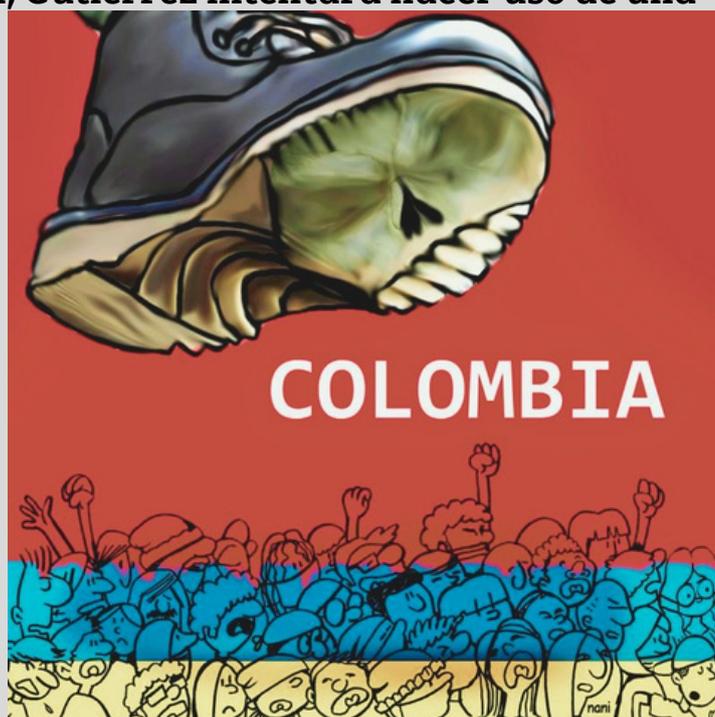
Cada cuatro años se renuevan las esperanzas de que el país cambie “eligiendo bien” o votando por “un buen gobierno”; se le suele atribuir al voto el don terrenal de “transformar” la vida política y económica de una sociedad. La historia se ha encargado de desmentir tal creencia. El hecho de que cada cierto tiempo entre el 40 y el 60 por ciento de la ciudadanía colombiana (hombres, mujeres, población LGBTIQ, campesinado, proletariado en sí, afrodescendientes, indígenas, expatriados, repatriados, excombatientes ahora en la vida civil, católicos, protestantes, ateos, personas con capacidades especiales, docentes, estudiantes, comerciantes, etcétera y más etcéteras) acuda religiosamente a las urnas, no hace que cambien las estructuras sobre las cuales se cimienta la sociedad; tampoco la hace responsable de los problemas que emanan de dicha estructura. La miseria, el desempleo, el asesinato sistemático del campesinado, las múltiples formas de opresión hacia el pueblo, la explotación, el hambre, la crisis ambiental que se vive en carne viva en campos y ciudades, la concentración de la riqueza, la opresión a las mujeres, entre otros, no se transforman con los espejismos de la democracia burguesa.

Las leyes del capital a escala global (capitalismo imperialista) se imponen sobre los buenos o malos deseos de gobiernos empotrados en Estados que se engranan y son engranados a dichas lógicas globales. Pero, con esto, ¿es lo mismo si gana esta derecha aupada por la estrategia paramilitar, a si triunfa esta izquierda liberal-progresista que amenaza la hegemonía uribista? Trátese la cuestión por partes. En sentido estructural, dado que ninguna de las dos apuestas le apunta a transformaciones de raíz, no ocurrirán mayores cosas; en términos superficiales y relativos, sí hay marcadas diferencias. Tómense por separados los escenarios de poder de Gutiérrez-Lara y Petro-Márquez.



Si ganan Gutiérrez y Lara la lectura de la tendencia es relativamente sencilla: se encontrarán con una institucionalidad estatal adecuada para un ejercicio de poder de corte fascista, es decir, dispondrán, además de un aparato militar robusto y entrenado para la represión en caso de futuros estallidos, de un andamiaje superestructural-jurídico esculpido para abusos gubernamentales. No tendrán problemas en mantener los vínculos activos con el imperialismo y, por esta vía, de dar continuidad a la estrategia paramilitar poniendo la naturaleza rural al servicio de las necesidades de transnacionales mineras, agroindustriales y grandes obras de infraestructura. Asimismo, exprimirá al máximo las arcas del Estado y escurrirá todo lo que más pueda a las clases explotadas para cumplir con las acreencias internacionales, manteniendo activa la burocracia en la que se soporta cualquier gobierno.

El punto incierto de un posible poder de continuidad uribista con Gutiérrez a la cabeza es la respuesta de las masas frente a un gobierno con los colmillos afilados para ejecutar prácticas fascistas. Esa parte del pueblo que demostró recientemente su capacidad de resistencia y combatividad, no pareciera ser presa fácil de regímenes que quieran imponer sus políticas fascistas, así se hayan fabricado leyes para reprimirlo. De cualquier forma, Gutiérrez intentará hacer uso de una institucionalidad estatal que lleva el sello facho de 20 años de uribismo, acelerado con el cuatrienio de Duque. ¿Cómo responderán unas masas combativas (aquellas de luchas espontáneas pero valientes y aquellas inmersas en luchas territoriales) a un gobierno que exacerbará el fascismo que se viene cociendo?



Si gana la dupla Petro-Márquez el escenario de futuro es más complejo de analizar. El ejercicio de poder de dicha dupla se encontrará con una institucionalidad estatal cuyo perfil, en la actualidad, tiene todo asentado para un proceder de corte fascista. ¿Cómo combatirá el tándem Petro-Márquez, y su posible gobierno, los mojones filofascistas que dejó establecido el gobierno Duque? ¿Cómo ejercería poder un gobierno liberal-progresista con una institucionalidad estatal diseñada para operar con prácticas fascistoides? No hay respuestas sencillas a estos interrogantes y no hay forma de anticiparlas sin caer en especulaciones. Lo que sí se puede proyectar en este punto es que Petro y Márquez deberán enfrentarse a un Estado que no está diseñado, siquiera, para la implementación de políticas elementales de cuño liberal-progresista como las que proponen.

Ligado a lo anterior debe considerarse un detalle no menor: el aparato militar actual también tiene la marca de 20 años de uribismo en el poder y más de un siglo de servilismo y entrenamiento imperialista, por ende, contrario a cualquier asomo de libertades democráticas y protesta social. Recientemente, el comandante de las fuerzas militares dejó clara su postura respecto a las actuales elecciones: es contrario a lo que encarna el Pacto Histórico. Si bien es cierto que no todas las veces el poder nace del fúsil, sí es cierto que no hay poder de Estado que no se soporte en este. En la medida en que un futuro ejercicio de poder político del Pacto Histórico no es fruto de un proceso revolucionario, en medio del cual se haya formado un ejército auténticamente del pueblo en el fragor de la lucha, no tiene más remedio que acudir al aparato militar ya existente: el esculpido por las manos de la ideología burguesa, protocapitalista y cómplice del imperialismo. No quiere decir esto que las fuerzas armadas del Estado colombiano sean una masa homogénea y que no haya diferencias entre lo que se denomina “fuerza pública” (fuerzas militares y policía) o que no se confronten al interior de cada división. Lo que se está diciendo es que en la cúpula castrense y en sus tradiciones formativas, predomina una ideología contraria a la del liberalismo y el progresismo. ¿Logrará un futuro gobierno del Pacto Histórico poner a su servicio estas fuerzas militares? Sí lo logra, ¿cuáles serían esas condiciones?, ¿a qué costo? Si

no lo logra, ¿se impondrá una dictadura abiertamente militar para derrocarlo? Si lo logra, ¿el gobierno Petro-Márquez emplearía el gendarme burgués para reprimir a las masas populares que se levanten?

Un último aspecto en esta lectura de las tendencias respecto a un posible gobierno Petro-Márquez es el papel que jugarán las grandes élites económicas nacionales. Así como no se ha forjado un ejército del pueblo, tampoco se han forjado formas y modos de producción para el pueblo, que le permitan tener autonomía, determinación y soberanía productiva. La dependencia económica tanto de las élites burguesas nacionales como del imperialismo en general (deuda externa pública, insumos, tratados, capital financiero...) es total. No es descabellado pensar que se intenten saboteos ante un gobierno promotor de reformas que afecten las ganancias de élites económicas nacionales y, de paso, de empresas transnacionales. ¿Qué cartas puede jugar el gobierno Petro-Márquez ante escenarios como estos que, por si acaso, se están viviendo en Perú y Chile? Soplan, por todos los costados, vientos de más movilizaciones sociales.

A todas estas, debe interrogarse, en este punto, el papel que van a jugar las masas que recientemente se alzaron y que, cada vez más, van sumando experiencia a su historia de combatividad en favor de reivindicar y exigir sus derechos. ¿Cómo responderían ante un posible saboteo económico? ¿Comprenderían tal saboteo o se convertirían en una fuerza contraria al poder de Petro y Márquez? ¿Cómo responderían a una posible sublevación del aparato militar? ¿Se enfrentarían a una dictadura militar con el mismo ímpetu que mostraron en el Estallido Social 2021? O, ¿Cómo responderían a una posible represión de un gobierno Petro-Márquez? Sea una forma de poder u otra: ¿Se levantarán otras fuerzas con la capacidad de reorientar hacia una transformación de raíz tanto las “ilusiones de cambio” que solo llegan hasta el reformismo, como las luchas populares que no trascienden más allá del economicismo y la espontaneidad? ¿Surgirá, en el fragor de las luchas venideras, un partido revolucionario que arme ideológicamente a las masas

oprimidas colombianas, y que forje las capacidades para combatir, al tiempo, la estrategia paramilitar y las ilusiones reformistas?

Desde hace décadas, las condiciones objetivas en Colombia (precisamente por el hambre, la pobreza, las múltiples formas de opresión, la concentración de la riqueza, la sumisión al imperialismo, entre tantos otros) están dadas para dar el salto de los movimientos sociales, las protestas e incluso los estallidos a la revolución...lo que pareciera estar lejos es el factor subjetivo...

BIBLIOGRAFÍA

- Coronell, D. (21 de noviembre de 2021) La apuesta de Uribe. Los Danieles. En: https://www.youtube.com/watch?v=euV_ZXmIb9Y
- Gutiérrez, F. (2022) Colombia: un país en orden y con oportunidades. Bases programa de gobierno Federico Gutiérrez presidente/Rodrigo Lara Sánchez vicepresidente (2022). En: https://federicogutierrez.com/wp-content/uploads/2022/04/PROGRAMA-DE-GOBIERNO_FICO-GUTIERREZ-ABRIL-19.pdf
- Angarita, J. (28 de febrero de 2022) Gustavo Petro pone en riesgo la democracia y es un salto al vacío: Fico Gutiérrez. RCN Radio. En: <https://www.rcnradio.com/politica/gustavo-petro-pone-en-riesgo-la-democracia-y-es-un-salto-al-vacio-fico-gutierrez>
- Laclau, E y Mouffe, C (1987) Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia (1987). Madrid: Siglo XXI de España.
- Petro, G. (27 de abril de 2022a) Facebook Gustavo Petro, Petro te escucha. Honda Tolima. En: <https://m.facebook.com/gustavopetrourrago/videos/petro-te-escucha-honda-tolima/415916327012361/>
- Petro, G. y Márquez, F. (2022b) Colombia potencia mundial de la vida. Programa de gobierno. En: <https://gustavopetro.co/descarga-programa-de-gobierno/>



¿SOLIDARIDAD FRENTE A UCRANIA?*

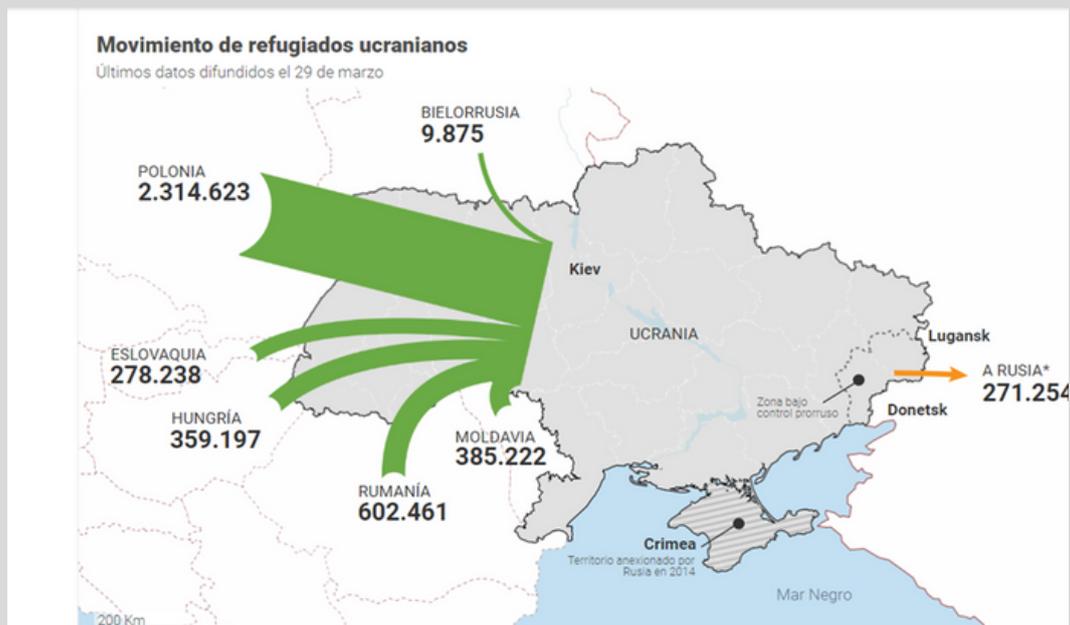
Jorge Eduardo Suárez Gómez.**

Una de las corrientes de pensamiento que circula para comprender la guerra contemporánea entre Ucrania y Rusia iniciada hace más de un mes ante la mirada incrédula de la comunidad internacional, podría resumirse de la siguiente forma: los invadidos son un pueblo “inventado” por los soviéticos (cuando los rusos eran socialistas) en el siglo XX y su joven independencia (de 3 décadas) así lo demuestra, por lo que los reclamos desde Moscú serían legítimos. Como parte de esta visión circula la idea, según la cual las agresiones rusas al pueblo ucraniano serían en contra de unos “Nazis” que gobiernan ese país.

Esta intervención armada de un país con un poder militar evidentemente superior sobre una nación más débil ha producido de acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el éxodo de casi 4 millones personas hacia el exterior, 6.500.000 en el interior y 13 millones que “están atrapadas en áreas afectadas por las hostilidades” [1]. La dirección en la que van los refugiados puede verse en el siguiente mapa elaborado por RTVE.

[*] Una versión más corta de este artículo fue publicada en el medio de comunicación alponiente.com, cuando la guerra apenas llevaba un par de semanas. Se intenta en esta nueva versión, recoger algunas recomendaciones hechas por algunos lectores del artículo.

[**] Politólogo y doctor en ciencias políticas y sociales. Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas-Universidad de Antioquia. Twitter: @JorgeESuarez2. Correo: jorge.suarez@udea.edu.co



Tomado de: <https://www.rtve.es/noticias/20220523/mapa-refugiados-guerra-ucrania/2297260.shtml>

Desde esa visión de la que estamos hablando, se vislumbra la intervención armada a través de una especie de venganza retroactiva que podría sintetizarse de la siguiente forma: lo mismo han hecho otras potencias imperialistas ¿por qué a ellos no se les condena como a Rusia hoy? ¿Por qué no se castigan las hostilidades ucranianas a la población rusoparlante de Donetsk y Lugansk que ahora se encuentran bajo dominio ruso? Desde esa perspectiva se traslada la atención de la tragedia de la guerra actual para poner la discusión en injusticias reales o supuestas del pasado, como si se estuviera cobrando sangre con sangre.

Esa “venganza histórica” que alimenta esta narrativa tiene un correlato racializado que podría resumirse en que a las víctimas de la guerra de hoy se les toma en cuenta porque son “blancos” mientras que, a las víctimas de otras etnias, en otros conflictos y en otros momentos; no se les reconoce. De acuerdo con de Currea Lugo, esta “victimización revanchista en la que se pone en duda la naturaleza de víctimas de los ucranianos” [2], se deriva una ausencia de empatía con

[1] Tomado de <<<https://www.rtve.es/noticias/20220329/mapa-refugiados-guerra-ucrania/2297260.shtml>>>

[2] De Currea Lugo, Victor (2022). “Crisis humanitaria en Ucrania, en la primera semana de guerra.”. Tomado de <https://victordecurrealugo.com/crisis-humanitaria-ucrania/>

las grandes víctimas de esa guerra contemporánea: los civiles ucranianos y algunos rusos. Contra esa versión antipática no hay imágenes e información que valgan: frente a ella se estrellan éxodos masivos de mujeres y niños, ciudades bombardeadas, civiles y periodistas muertos. Tampoco pueden contra esa narrativa la evidente solidaridad desplegada por algunos de los estados vecinos (Polonia, Moldavia, Rumania, R. Checa, entre otros) quienes vivieron en el pasado la propia materialización de uno de los principios de la política exterior planteado desde la época zarista: “las fronteras rusas se defienden invadiendo”, máxima que ha sobrevivido a la era postsoviética. Mucho menos pueden contra esa versión las bizarras imágenes de ciudadanos y periodistas rusos que arriesgándose a una pena de 15 años de cárcel, hacen proclamas contra la guerra. Los ciudadanos ucranianos que en forma de partisanos se oponen a las hostilidades generan pocos ecos en esa perspectiva.

Esta política exterior rusa en acción es tan sólida que pese a los intentos restringidos de la comunidad internacional de detener la expansión militar a través de mecanismos como sanciones a la economía rusa, la intervención continúa de forma exitosa y a más un mes desde el inicio de las maniobras, el presidente ucraniano Zelensky (de ascendencia judía) afirmó que retiraba la pretensión de hacer parte de la OTAN, “casus belli” según su poderoso vecino. Esto se suma a la negativa en los días pasados de la Unión Europea de incorporar a Ucrania como un Estado miembro, movimientos a partir de los cuales se desarrollan unas negociaciones que avanzan poco en medio de las hostilidades.

Las corrientes de pensamiento que se enuncian al principio de este texto complementan esa política exterior de un país que desarrolló en el siglo XX una vocación de potencia global que hoy no parece extinta y que anuncia ser nuevamente un competidor en lo político y en lo cultural como lo demuestra esta exitosa campaña militar/comunicacional.





**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas



CELYC